

COMISION DEL MEDIO AMBIENTE

DIPUTADOS INTEGRANTES:

FRANCISCO GARCIA GAMEZ

LINA ACOSTA CID

JOSE VICTOR MARTINEZ OLIVARRIA

JOSE LUIS MARCOS LEON PEREA

REYNALDO MILLAN COTA

HONORABLE ASAMBLEA:

A los diputados integrantes de la Comisión del Medio Ambiente de esta Legislatura, previo acuerdo de la Presidencia, nos fue turnado para estudio y dictamen, escrito presentado por el Gobernador del Estado, refrendado por el Secretario de Gobierno, con el que presenta iniciativa de Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la cual tiene por objeto actualizar la norma estatal en materia ambiental con las disposiciones federales que instituyen el marco de competencias de las entidades federativas y de los municipios; asimismo, previo acuerdo de la Diputación Permanente, no fue turnado para estudio y dictamen, escrito de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la Transparencia, con el que presentan iniciativa de Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la cual conlleva un objetivo similar a la iniciativa planteada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 94, fracción I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

Mediante escrito presentado el 04 de diciembre de 2007, el Gobernador del Estado, refrendado por el Secretario de Gobierno, presentó la iniciativa de ley mencionada con antelación, la cual tuvo a bien fundamentar bajo los siguientes argumentos:

“La vida en sociedad, que diferencia al hombre de los demás seres vivos, ha generado desde un principio hasta nuestros días, diversas necesidades que lo han obligado a hacer uso de los recursos de su entorno natural para satisfacerlas. Así, mientras los demás seres vivos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio para cubrir sus requerimientos.

De esta forma, a medida que han avanzado las civilizaciones, se ha generado una relación entre el hombre y la naturaleza cuyo objetivo ha sido la satisfacción de las necesidades humanas —unas básicas y otras creadas en el desarrollo de procesos productivos y el logro de comodidad en la vida cotidiana—, relación que por desgracia en las últimas décadas no ha sido equilibrada, sino hostil, discordante, en la que la naturaleza ha resultado sobreexplotada, y esa agresión ha impactado perjudicialmente al medio ambiente.

El progreso tecnológico, el acelerado crecimiento demográfico y la falta de conciencia ecológica son algunas de las causas que convergen en la alteración del ambiente, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio ecológico de todo nuestro planeta: el calentamiento global y el agotamiento de la capa de ozono son muestras palpables de ello. La contaminación, generadora de ambas alteraciones, es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo. Se origina al producirse un desequilibrio en el medio ambiente como resultado de la adición en éste de cualquier sustancia en cantidad tal que causa efectos adversos en el hombre, en los animales, los vegetales o los materiales expuestos a dosis que sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza.

En la actualidad, el resultado del desarrollo tecnológico ha originado diversas formas de contaminación —en la atmósfera, el agua, el suelo—, que alteran el equilibrio físico y mental

del ser humano. Debido a esto, la contaminación se convierte ahora en un problema aún más crítico que en épocas pasadas. Tal es su magnitud, que según la Organización Mundial de la Salud la contaminación ambiental se ha convertido en la principal causa de mortalidad y morbilidad en el mundo, por encima de los conflictos bélicos y las infecciones; es decir, está causando más bajas que las propias guerras y los llamados eventos catastróficos debidos a fenómenos naturales.

La alteración del ambiente ha registrado, pues, una transformación en la estructura y el funcionamiento del sistema terrestre de tales dimensiones que se están amenazando los procesos y componentes bióticos y abióticos en que se sustenta la viabilidad de la especie humana; sin embargo, de esta situación no se debe inferir la imposibilidad total de compatibilizar el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Esto será posible siempre que el hombre desarrolle sus actividades en armonía con su medio ambiente, y para lograrlo es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida, no sólo de la especie humana, sino de todos los seres que habitan la Tierra.

De esta forma, lograr la armonía entre el hombre y la naturaleza nos enfrenta con diversos retos desde el punto de vista conceptual y político, entre ellos: aceptar que estamos ante un proceso inédito en varios sentidos; hacer conciencia del alcance de la transformación del sistema terrestre y reconocer que los cambios son irreversibles en ámbitos fundamentales para la existencia humana, como la pérdida de diversidad biológica o la transformación del sistema climático; que incidimos globalmente en casi todos los ciclos biogeoquímicos de que dependemos para nuestras actividades económicas y para nuestra existencia; y que la solución de los problemas ambientales del mundo demanda la aplicación de acciones locales, sustentadas debidamente en normas jurídicas para garantizar su debida realización en beneficio común.

En este contexto, el Estado de Sonora, que por su posición geográfica posee una gran biodiversidad ecológica, no está exento de los problemas de la contaminación. Durante las últimas décadas han ocurrido cambios económicos y sociales en la entidad, acompañados, al igual que los del resto del país y del mundo, de un creciente deterioro de la calidad del ambiente y una reducción de los recursos de esa biodiversidad.

Por ello, en la actual gestión administrativa se ha decidido que a la par de aumentar las fuentes de empleo y el crecimiento económico, se impulse una política ambiental que garantice la sustentabilidad de las actividades productivas. Congruente con esta determinación, en el Eje Rector 2 "Empleo y crecimiento económico sustentable" del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, dentro del objetivo "Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva", se ha dispuesto promover una nueva cultura ecológica que garantice un aprovechamiento racional y eficiente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente; fortalecer la coordinación con la Federación, los municipios y las organizaciones sociales y empresariales para vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos ecológicos; desarrollar un sistema estatal de información y monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo que incluya una red de monitoreo atmosférico e inventario estatal de emisiones de fuentes fijas y semifijas; prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales; alentar la incorporación de tecnologías no contaminantes y consistentes con el desarrollo sustentable en los procesos industriales, entre otras estrategias.

Para lograr lo anterior, es requisito fundamental contar en el Estado con un marco jurídico ambiental confiable y actualizado, respetuoso de las disposiciones de la legislación federal que definen las competencias en esta materia entre los tres órdenes de gobierno, y que permita, de una forma simultánea, por una parte, asegurar la integridad de los ecosistemas, preservar la biodiversidad, la salud y la capacidad regenerativa de los sistemas ambientales, "soporte de la vida"; y por la otra, incentivar el desarrollo económico y provocar una reestructura en la vida social que ocasione cambios en los patrones de conducta y de consumo que impactan al medio ambiente.

La actual Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 3 de de enero de 1991, inició su vigencia en el mes de abril de ese mismo año. A partir de entonces, las leyes federales en materia ecológica y ambiental que, por disposición constitucional, distribuyen competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, han sido reformadas en varias ocasiones para hacer frente a situaciones inéditas, o bien, se han promulgado nuevos ordenamientos con esa misma finalidad. Tal es el caso de la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus Reglamentos en materia de Evaluación del Impacto Ambiental; Ordenamiento Ecológico del Territorio; Auditoría Ambiental; y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; o la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento. Esta situación de desfase con la legislación federal ha provocado que la mencionada Ley estatal se encuentre limitada para realizar una verdadera gestión ambiental, lejos de proporcionar las bases legales que le den sustento a ésta.

En virtud de ello, uno de los propósitos que se pretenden con la Iniciativa de Ley que hoy se somete a la consideración de esa Soberanía es actualizar la norma estatal en materia ambiental con las disposiciones federales que instituyen el marco de competencias de las entidades federativas y de los municipios. Con ello se amplían las facultades estatales y municipales para propiciar el desarrollo sustentable, contando con las bases necesarias para garantizar el derecho a vivir en un ambiente adecuado.

Así, de aprobarse esta Iniciativa, el Estado, a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, podrá ahora prevenir y controlar la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales o de fuentes móviles que no sean de competencia federal o municipal, o bien, aquélla generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales; regular y controlar el manejo integral de los residuos de manejo especial y autorizar y controlar los residuos peligrosos originados por microgeneradores, así como vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que en materia de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente expida la Federación en las materias de competencia estatal, acciones todas ellas que no se encuentran normadas en la Ley actual.

Por su parte, para los municipios se adicionan atribuciones para aplicar disposiciones relativas a la prevención y control de los efectos ocasionados sobre el ambiente por el manejo de residuos sólidos urbanos, o por la contaminación generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios o de fuentes móviles que no sean de competencia federal o estatal.

Además de la congruencia con el marco regulatorio federal, con esta Iniciativa se pretende consolidar la protección y el mejoramiento del ambiente y el entorno ecológico; reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades ambientales al precisar todos los requisitos que deban reunir los interesados en obtener alguna resolución sin dar margen a establecerlos en normas administrativas, o bien, al fijar términos para emitir dichas resoluciones, estableciéndose, en algunos casos, la positiva ficta cuando no se obtenga respuesta dentro del término legal; se pretende incrementar la eficiencia del sistema regulatorio ambiental; implementar los costos ambientales a quien los provoca, como una forma de alentar la responsabilidad social con el medio ambiente; fomentar la educación ecológica y promoción de costumbres respetuosas del medio ambiente, desde el nivel básico hasta el superior; ampliar los márgenes de participación de los sectores social y privado en la gestión ambiental, a través de la concurrencia activa en la aplicación de diversos instrumentos de política ambiental, del establecimiento y administración de áreas de conservación destinadas voluntariamente por particulares a acciones de preservación y restauración de sus ecosistemas y biodiversidad, y de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ambientales mediante la denuncia popular.

Con el cumplimiento de los propósitos anteriores, se logrará una mejor regulación ambiental que en los hechos debe traducirse en el otorgamiento de certidumbre a largo plazo para la inversión y un medio ambiente de calidad para los habitantes del Estado.

La presente Iniciativa de Ley consta de ocho Títulos, que se dividen en Capítulos y éstos a su vez, en Secciones, para facilitar su aplicación y observancia. En el Título Primero se establecen las disposiciones de carácter general para la aplicación de la misma; se precisan las atribuciones del Estado y de los municipios, y se prevé, como en todas las materias constitucionalmente concurrentes, la posibilidad de coordinarse entre ellos y con la Federación para la asunción de sus respectivas funciones. Asimismo, para que exista orden y congruencia en las acciones ambientales, se dispone la sujeción de las dependencias y entidades estatales que ejerzan atribuciones relacionadas con el objeto de la Ley a los mandatos de la misma, a las normas oficiales mexicanas, los criterios ecológicos y las demás disposiciones aplicables.

Por lo que hace a los municipios, en este Título Primero, como se indicó, se incluyen normas que les permiten asumir mayores responsabilidades. En este sentido, la Iniciativa contribuirá a lograr un auténtico federalismo en la gestión ambiental y de los recursos naturales, ya que además se provee a los municipios de las herramientas que les permitan formular y conducir, con mayor eficacia, la política ambiental en sus circunscripciones; agilizar sus procesos administrativos para el otorgamiento de las diversas autorizaciones, licencias y permisos ambientales, generándose con ello un mayor desarrollo económico en sus territorios, y, algo importante en esta materia, les permitirá organizar el uso del suelo analizando la compatibilidad de éste con el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

En el Título Segundo, en el que se establecen los principios e instrumentos de la política ambiental, se retoman como principios novedosos y necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la entidad, atendiendo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el responsabilizar a quienes realicen obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente de prevenir, minimizar o reparar los daños que cause con dichas obras o actividades, asumiendo los costos que tal afectación implique; incentivar a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; erradicar la pobreza para alcanzar un desarrollo sustentable, y garantizar la participación de la mujer y de otros grupos en las funciones de protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y en el mejoramiento de la calidad ambiental.

Uno de los reclamos principales de la sociedad ha sido el ordenamiento ecológico del territorio, al ser éste un elemento determinante en la planeación del crecimiento de cualquier región. Es por ello que en el Título Segundo de esta Iniciativa, referente a la Política Ambiental, el ordenamiento ecológico se prevé como un instrumento de ésta y de acuerdo con ello, se disponen diversos criterios a considerar en su formulación, como la naturaleza y característica de cada ecosistema, la vocación de cada área o región, el equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, así como los desequilibrios existentes en los ecosistemas y el impacto ambiental que generarían los nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.

En relación con lo anterior, en este Título Segundo se dispone el contenido de los programas de ordenamiento ecológico —el estatal y los municipales— y las bases para su formulación, así como los supuestos en que pueden modificarse.

Otro instrumento de la Política Ambiental es la regulación ambiental de los asentamientos humanos, elemento determinante en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, desde una Comisaría hasta un municipio mediano o grande de la entidad. Concientes de ello, con esta Iniciativa se busca ampliar los criterios que deben considerarse en la planeación de los asentamientos humanos para lograr un desarrollo sustentable de los mismos.

Hasta hace poco tiempo, los costos generados por la prevención, restauración y mejoramiento del ambiente habían sido sufragados, en la mayoría de los casos, sólo por los gobiernos federal, estatales y municipales; sin embargo, actualmente existe una creciente tendencia de los particulares para participar en la implementación de acciones y medidas más allá de lo que la normatividad ambiental los obliga. Tomando en consideración esta tendencia, en la Iniciativa se establecen diversos instrumentos económicos como una nueva herramienta de la Política Ambiental, mediante los cuales se pretende estimular y compensar a quienes lleven a cabo actividades a favor del ambiente. De acuerdo con ello, se prevén como tales instrumentos, los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de

mercado por los que las personas asumen los beneficios y los costos ambientales que generen sus actividades económicas. Además, se establecen las actividades que deben considerarse prioritarias para el otorgamiento de dichos estímulos.

La evaluación del impacto ambiental es un instrumento jurídico que se instituyó por primera vez en el Estado en la actual Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, desde el año de 1991, cuando ésta entró en vigor. Este instrumento ha permitido a las autoridades ambientales conocer las obras o actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones ambientales, y establecer con base en ello las condiciones a que se sujetará su realización.

A pesar de los logros obtenidos con el establecimiento de la evaluación de impacto ambiental en la Ley, se han presentado algunas deficiencias en su aplicación, ya que se deja a criterio de los interesados determinar si la obra o actividad causaría o no desequilibrios ecológicos y de considerarlo así, deben presentar un informe preventivo, mismo que una vez evaluado por la autoridad ésta decide, de acuerdo con el resultado, la presentación por parte de los interesados de una manifestación de impacto ambiental. Esta situación cambiará con la Iniciativa de Ley que se presenta, toda vez que ya no se dejaría al arbitrio del particular ni de la autoridad determinar las obras o actividades que causarán una afectación al ambiente, sino que la propia Ley especifica cuáles de éstas pueden ocasionarlo, y en consecuencia los interesados estarían obligados a contar con una autorización en materia de impacto ambiental que otorgarán las autoridades ambientales correspondientes —estatal o municipales— cuando determinen que las obras o actividades no ocasionarán daños al ambiente o a los ecosistemas, o desequilibrios ecológicos o rebasen los límites y condiciones señalados en los reglamentos y en las normas oficiales mexicanas expedidas por la autoridad federal competente.

En cuanto a los prestadores de servicios ambientales que se prevén en la Ley actual, se propone en esta Iniciativa no sólo establecer un padrón de dichos prestadores para la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental como lo considera la legislación ambiental vigente, sino uno más amplio que considere todos los servicios que estas personas físicas o morales presten con el fin de garantizar la calidad en los estudios, exámenes, evaluaciones, estimaciones, determinaciones, cálculos, auditorías, trabajos, análisis y peritajes en materia ambiental que los mismos lleven a cabo.

Los prestadores de servicios ambientales serán responsables ante la Comisión y los Ayuntamientos de aplicar las mejores técnicas, herramientas, equipo y metodologías existentes, debiendo establecerse en el Reglamento respectivo los requisitos que deban cubrir los interesados en prestar dichos servicios para inscribirse en el padrón, las modalidades a que se sujetará su actuación o actividad y las causas y procedimientos de cancelación del registro.

Con estas disposiciones se garantiza la seriedad de los resultados generados por los prestadores de servicios ambientales, como un requisito importante para la toma de decisiones adecuadas de las autoridades en la prevención de los impactos ambientales y desequilibrios ecológicos, o bien, en su restauración.

En virtud de la globalización de la economía mexicana con la suscripción del Tratado de Libre Comercio en 1994, el sector productivo del Estado enfrenta el reto de la competitividad en los mercados internacionales, ya que los índices de calidad son un factor determinante para la venta de sus productos o servicios. Esto los ha obligado a observar estándares de calidad en los que se encuentra implícitos el hecho de observar de forma voluntaria medidas y acciones tendientes a la prevención y control de la contaminación que les permitan ser más eficientes en su producción.

Una de estas formas es la adopción de manera voluntaria, por parte de dichos productores y organizaciones empresariales, de normas adicionales a las establecidas en las disposiciones jurídicas, que mejoren su desempeño ambiental. Otra, la posibilidad de evaluar periódicamente la observancia de la normatividad ambiental frente a los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, mediante auditorías ambientales que se llevarán a cabo, también de forma voluntaria, en los términos que

establezcan las disposiciones reglamentarias respectivas. De esta forma se podrán definir las medidas preventivas y correctivas indispensables para la protección del medio ambiente.

Actualmente, la Ley no contempla la autorregulación ni las auditorías ambientales, por lo que, considerando sus beneficios, en la presente Iniciativa se incorporan disposiciones referidas a los principales aspectos de la autorregulación de los productores, establecimientos y organizaciones empresariales, así como de las auditorías ambientales, como el objeto y alcances de éstas, las formalidades a seguir en su realización y el reconocimiento o certificación de peritos ambientales que garanticen la calidad profesional de las auditorías, entre otros.

El Título Tercero de esta Iniciativa es de particular relevancia para el Estado, pues regula lo relativo a la preservación, conservación y administración de la biodiversidad; es decir, de la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Al respecto se debe mencionar que en Sonora se reconocen 53 distintos tipos de vegetación, se estima una riqueza de hasta 6,000 formas de especies de flora potenciales y se han identificado 230 formas de mamíferos terrestres; 533 formas de aves; 210 formas diferentes de reptiles; 38 formas de anfibios, 8,000 especies de invertebrados marinos en el Mar de Cortes, más de 875 especies de peces; ocho formas de reptiles marinos y diversos mamíferos marinos.

Sin embargo, la pérdida de ecosistemas por incendios, desmontes, plagas, apertura o ampliación de centros de población, el desarrollo productivo, la erosión y la salinidad, producen la simplificación y fragmentación de su estructura. Tales disturbios crean barreras de dispersión para muchas especies, poniendo en peligro su persistencia. Tamaños poblacionales pequeños asociados al aislamiento de pequeños parches de hábitats y cambios en las relaciones ecológicas asociadas con un incremento de bordes de los hábitats resultan en poblaciones condenadas a su desaparición. La pérdida de biodiversidad constituye no sólo un problema para el equilibrio de los ecosistemas naturales, sino que afecta también a las comunidades humanas de estas regiones que sustentan sus frágiles economías en la utilización de los recursos naturales.

En virtud de la magnitud de esta problemática, en este Título Tercero se incluyen disposiciones tendientes a regular con mayor eficacia las áreas naturales protegidas —zonas territoriales de ambientes naturales que albergan una gran variedad de especies, haciéndolas ricas en biodiversidad y que por ello al declararlas como tales se sujetan a regímenes jurídicos de protección—; se establece por primera vez en el Estado a las áreas de conservación, modalidad de las áreas naturales protegidas, constituidas por predios destinados voluntariamente por los interesados para sujetarlos a acciones de preservación, conservación o preservación de los ecosistemas y su biodiversidad; y finalmente, se instituyen, también como novedad, las zonas de restauración, que al igual que las anteriores, son una variedad de área natural protegida, que se establecen mediante una declaratoria del Estado o de los Ayuntamientos, según corresponda, para someterlas a regímenes de protección cuando presenten procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de difícil regeneración o restablecimiento.

Con estas disposiciones, se logrará revertir los efectos producto de la pérdida de los ecosistemas, salvaguardar la diversidad genética y proteger los entornos naturales; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, y generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del Estado.

La Iniciativa propone, asimismo, la creación de un Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas, constituido por dichas áreas, las áreas de conservación y las zonas de restauración de jurisdicción estatal o municipal, en el que se determinarán la clasificación de éstas, sus características, objetivos, apoyos y procedimientos para expedir sus declaratorias o las certificaciones que las hubieran constituido.

El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 establece una profunda reforma legislativa, a través del Programa Estatal de Mejora Regulatoria, con la finalidad de promover la inversión, facilitar la creación de nuevas empresas y garantizar la sustentabilidad de las actividades productivas mediante la reducción y simplificación de trámites y una mayor transparencia del marco regulatorio. Congruente con ello, el Título Cuarto de la presente Iniciativa establece de manera precisa disposiciones sobre la denominada Licencia Ambiental Integral, que viene a ser un instrumento novedoso en el Estado —y en el país—, cuyo propósito es minimizar y agilizar trámites y reducir los costos a los particulares en las gestiones ante las autoridades ambientales.

En este sentido, los interesados en ejecutar obras o actividades saben que requieren, en varias ocasiones y para una sola obra o actividad, diversos permisos, licencias, autorizaciones o concesiones de las autoridades ambientales, debiendo hacer un trámite diferente para obtener cada uno de ellos. De aprobarse esta Iniciativa, los interesados podrán conseguir todos los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que necesiten presentando una sola solicitud de todos ellos en un solo documento, denominado Licencia Ambiental Integral.

En la elaboración de una solicitud de Licencia Ambiental Integral los responsables de las obras o actividades deberán realizar un proceso de análisis sistemático y global que identifique y anticipe los probables impactos y riesgos ambientales, negativos y positivos, derivados de las acciones que pretende desarrollar, permitiendo seleccionar las alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos y riesgos no deseados. El resultado de dicho análisis reportará los elementos que permitirán a las autoridades y a los responsables de las obras o actividades contar con un enfoque a largo plazo y una visión más completa e integrada del efecto que dichas obras o actividades provoquen sobre el medio ambiente.

La Licencia Ambiental Integral genera otros beneficios, además de la simplificación de trámites y reducción de costos, pues su elaboración demanda de quienes la deban presentar una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad en el diseño y la ejecución de las acciones y proyectos, e incentiva la investigación de nuevas soluciones tecnológicas y una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones.

En caso de ser necesario, de acuerdo con la evaluación de la solicitud de la Licencia Ambiental Integral, la autoridad ambiental podrá requerir la modificación del proyecto de obra o actividad sujeto a la obtención de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones, y el establecimiento de programas o medidas adicionales de prevención y mitigación a fin de evitar, atenuar o compensar los impactos y riesgos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en cualquier etapa del proyecto de la obra o actividad, o bien en la operación normal de éstos y en el caso de algún accidente ambiental.

Asimismo, en la propia Iniciativa se prevé la posibilidad de que las autoridades ambientales estatales y municipales puedan exigir a los titulares de una Licencia Ambiental Integral el otorgamiento de seguros o garantías, en el supuesto de que las obras o actividades autorizadas puedan producir daños graves a los ecosistemas, la salud pública o a los bienes cuando se incumplan las condiciones establecidas en la Licencia Ambiental.

Por su parte, el Título Quinto regula los aspectos relacionados con la protección del ambiente y de los distintos elementos naturales, dedicando un Capítulo para cada uno de ellos, los principales factores que provocan su contaminación y los criterios y medidas que deben tomarse para controlar y evitar tal contaminación.

En este sentido, en cuanto a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera se determinan las acciones que deben realizar los responsables de establecimientos considerados como fuentes fijas de contaminación que emitan o puedan emitir olores, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, para evitar esa polución y contar con una calidad del aire satisfactoria en todos los asentamientos humanos del Estado. De igual forma, se dispone la obligación a cargo de los responsables de dichas fuentes de contaminación de proporcionar la información correspondiente a sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y materiales y residuos, con el objeto de integrarla en un registro con datos desagregados por sustancia y por fuente. Este registro permitirá que la

autoridad conozca el flujo de contaminantes a través de los distintos elementos naturales, proporcionando elementos para diseñar políticas y estrategias para prevenir y controlar la contaminación.

Como una medida para evitar la contaminación de la atmósfera, se restringe la combustión a cielo abierto, permitiéndose únicamente cuando se cuente con la autorización de la autoridad ambiental. Este control ayudará a mejorar la calidad de aire y la salud de las personas, ya que las quemas o combustiones se llevarían a cabo de manera regulada y cuando las condiciones ambientalmente sean las adecuadas.

La Iniciativa busca efficientar la prevención y control de la contaminación del agua. Para ello se prevén diversas obligaciones a cargo del Estado y los Ayuntamientos, con apego a la competencia constitucional instituida en esta materia para estos últimos en materia de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Igualmente, se disponen medidas para promover un uso racional y eficiente de este recurso natural, como el empleo de aguas residuales tratadas en el riego de áreas verdes y la reutilización de las aguas grises en las nuevas edificaciones; la sustitución de agua potable por agua residual tratada en los usos productivos que lo permitan, así como la instalación y aplicación de productos ahorradores de este líquido.

En cuanto a la prevención y control de la contaminación del suelo se establecen disposiciones que buscan hacer un uso más adecuado de este recurso, con base en su capacidad y vocación natural, y se obliga a los directamente responsables de su contaminación a reparar los daños causados al contaminarlo y a realizar las acciones de remediación que resulten necesarias.

En este Título Quinto se dispuso un Capítulo, que no se contiene en la legislación actual, exclusivo para la prevención y control de la contaminación por residuos, ya que su manejo y su disposición inadecuados han reportado efectos adversos sobre los diferentes elementos naturales y, en general, sobre los ecosistemas. Sin duda, una de las principales fuentes de contaminación en los últimos años ha sido y, de seguir con las mismas prácticas, continuará siendo el manejo y disposición final de los residuos producidos por la población en su acelerado crecimiento y por las actividades económicas industriales y comerciales.

En este Capítulo se utiliza la “gestión integral de residuos” como marco filosófico que permite promover la prevención de la contaminación, la valorización de los residuos y el consumo sostenible, buscando que se incremente la competitividad, se reduzca la presión sobre los recursos naturales, se generen nuevas fuentes de empleo y se atraiga inversión extranjera responsable.

Es por ello que en la Iniciativa se establece la competencia del Estado y los Ayuntamientos en materia de residuos, con apego a las disposiciones de la Ley General para al Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Entre las atribuciones que se les otorgan destaca la elaboración e instrumentación de los programas para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial y de los sólidos urbanos, respectivamente, señalándose de esta forma a la Comisión y a los Ayuntamientos como actores fundamentales para alcanzar una gestión integral de éstos. De igual forma, se dispone un sistema para promover al máximo la prevención y la minimización en la fuente de la generación de residuos, y cuando esto no sea posible, se fomente la reutilización de materiales, o bien, como tercera prioridad, se promueva la valorización de los residuos. En el supuesto de que éstos no puedan valorizarse deberán ser tratados adecuadamente. Por último, se prioriza el manejo responsable de sistemas de disposición final.

De acuerdo con esta Iniciativa, los generadores de residuos también tienen responsabilidades en el manejo de éstos, ya sean industriales, agrícolas, turísticos o, incluso, domésticos. Los productores, importadores o distribuidores de productos deben hacerse cargo de los productos o de sus empaques que introducen al mercado y que puedan contaminar. Por ello, el proyecto establece herramientas para obligarlos a implementar medidas que eviten la contaminación del ambiente o perjudiquen la salud humana que pudieran generar dichos productos o envases.

En materia de actividades riesgosas se establece el requisito de contar con la autorización de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable para llevar a cabo la actividad así calificada, así como la de actualizar anualmente los programas de prevención de accidentes que produzcan impactos negativos al ambiente.

Por lo que hace a la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, se obliga a los responsables de estas actividades a implementar programas y medidas de restauración de las zonas explotadas y a realizar acciones para controlar o minimizar las emisiones o descargas de contaminantes, con lo que se prevendrá el deterioro de tales zonas, la contaminación ambiental o los desequilibrios en la ecología.

Considerando que disfrutar de un ambiente sano es un derecho de todos los seres humanos y que ello conlleva la obligación de cuidarlo, debemos, además de exigir que las autoridades establezcan medidas para garantizar su adecuada protección, compartir este deber con ellas. Con la finalidad de que la sociedad participe en la protección del ambiente y de los recursos naturales, en el Título Sexto de la Iniciativa, denominado “De la Participación Social”, se disponen los medios adecuados para ello.

De esta forma, se prevé el establecimiento del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable como un órgano permanente de coordinación institucional y concertación social encargado de proponer programas y acciones ecológicas, y se dispone la creación en los Ayuntamientos, de los Consejos Municipales de Ecología, órganos equivalentes del Consejo Estatal.

El acceso a la información medioambiental es indispensable para intervenir con conocimiento en los asuntos relativos a la protección del ambiente y el equilibrio ecológico. En este sentido, en el Título Sexto se establece por primera vez en el Estado, el derecho de tener acceso a la información, que se ejercerá de dos formas: el derecho a buscar y obtener información en poder de las autoridades, función que se le atribuye a todo el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales; y el derecho a recibir información ambiental relevante por parte de las autoridades, que deben recopilarla y hacerla pública, sin necesidad de que medie una petición previa, como es el caso de la Gaceta en materia ambiental y el informe de la situación general del Estado en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, que deberá realizar la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable cada tres años.

Se dispone también en este Título Sexto, la constitución del Fondo Ambiental Estatal como un instrumento que permitirá a la autoridad ambiental contar con recursos económicos para realizar acciones de protección, preservación y restauración del medio ambiente; el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas; el desarrollo de programas de planeación ecológica, educación e investigación en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas de protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.

En el Título Séptimo se regulan las facultades del Gobernador del Estado, la Comisión y los Ayuntamientos para expedir en el ámbito de sus respectivas competencias, los reglamentos, decretos, acuerdos, las circulares y las demás disposiciones de observancia general necesarias para proveer, en su esfera administrativa, la observancia de la Ley, garantizando la participación del público en el proceso de toma de decisiones en la elaboración de tales disposiciones.

Finalmente, el Título Octavo contiene disposiciones sobre medidas de control y seguridad de los asuntos previstos por la Ley, así como la ejecución de tales medidas; establece las sanciones que se aplicarán con motivo de las infracciones a la misma y a los demás ordenamientos que deriven de ella, y prevé la forma en que deberán atenderse las denuncias populares.

En este sentido, se incluyen disposiciones a observarse en la realización de actos de inspección y vigilancia, conteniéndose un procedimiento para ello de forma más precisa que el previsto en la Ley actual, en el que se adoptan herramientas de mejora regulatoria y es congruente con la experiencia obtenida en la práctica, por lo tanto, más efectivo y acorde con la realidad.

Además, se incluyen dentro de este rubro, las sanciones por el incumplimiento de la Ley, como la suspensión, revocación o cancelación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales, en los casos que la misma Ley dispone, sanciones éstas que no se prevén en la Ley actual. Asimismo, se establece la posibilidad de que la autoridad, bajo determinados supuestos, otorgue a los infractores de la normatividad ambiental la posibilidad de cubrir las multas que les hayan sido impuestas o conmutarlas mediante inversiones equivalentes a éstas en la adquisición e instalación de equipo para mejorar su desempeño ambiental o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre que se garanticen las obligaciones del infractor. Con ello se privilegiarían las conductas con efectos directos sobre las condiciones del medio ambiente.

Como medio de defensa de los particulares afectados con resoluciones de las autoridades ambientales, se prevé en esta Iniciativa el recurso de revisión y se establecen las reglas para que se sustancie y resuelva. Cabe señalar que la actual Ley otorga a los particulares el derecho de interponer en estos casos el recurso de inconformidad, y no el de revisión como se hace en esta Iniciativa, mismo que se instituye con normas procedimentales más precisas, cuidando preservar las garantías constitucionales de los afectados.

Por último, este mismo Título establece la denuncia popular. La participación de la sociedad como denunciante de eventos que violenten las normas ambientales o que provoquen desequilibrios ecológicos o daños al ambiente se vuelve ahora muy importante, porque en virtud de ello se podrá coadyuvar con las autoridades ambientales, aportando pruebas, documentos e información que se considere conveniente para preservar un ambiente sano; y las autoridades ambientales, por su parte, deben informar a los denunciantes sobre el trámite de sus denuncias para que tengan la certeza de que sus acusaciones son tomadas en cuenta con la finalidad de lograr un ambiente sano en beneficio de todos los habitantes del Estado.”

Por otra parte, el día 19 de agosto del año en curso, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la Transparencia, presentaron la iniciativa descrita en la parte introductoria del presente dictamen, la cual fundamentaron en los siguientes argumentos:

“Los cambios radicales que actualmente sufre nuestro medio ambiente constituyen el principal factores para considerar urgente y primordial el tema ambiental. Cómo habitamos, la calidad del aire que respiramos y qué tipo y calidad de agua consumimos son elementos sustanciales para elevar nuestra calidad de vida en un entorno limpio y sano.

Desafortunadamente, el tiempo nos empuja a ser reactivos ante las graves circunstancias climáticas que padecemos, por lo que es preciso tomar acciones concretas con la mayor brevedad, ya que tales cambios, bien sean naturales o producidos por el hombre, tienen impactos cada vez más concretos y visibles en el mundo, como los desastres naturales y las inundaciones; la alteración de las temperaturas del mar por el aumento de su nivel, debido al deshielo y al aumento de las lluvias; la desertificación en zonas que eran boscosas; el repentino cambio de estaciones; los cambios de las corrientes marinas, que provocan inundaciones y fenómenos meteorológicos en lugares donde no se habían presentado con anterioridad y en mayor intensidad; fenómenos nunca antes vistos, como los tsunamis; aumento de las temperaturas; climas extremosos; y deshielo de los polos.

Todos éstos son fenómenos que hoy se producen ante nuestros ojos casi de manera cotidiana y han traído como consecuencia el cambio en las rutas naturales de migración de distintas especies animales, la deforestación y la degradación de zonas áridas, extinción de especies de flora y fauna, además de que cobran vidas y causan daños materiales

incuantificables y producen el desplazamiento masivo de personas que, dada la pérdida de sus seres queridos y sus posesiones, buscan refugio para sobrevivir a estas circunstancias.

En tal sentido, la comunidad científica y la sociedad civil han centrado sus esfuerzos en generar diversas soluciones y respuestas a fin de revertir estos efectos. La planeación de largo plazo es un tema prioritario en la agenda de diversos países que tienen muy claro que el desarrollo sustentable es el único camino que tenemos como seres vivos para subsistir. Los esfuerzos para revertir el cambio climático no se han hecho esperar en la comunidad internacional.

Como respuesta a estos hechos, se impulsó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual ha sido signada por 189 países y de la que México es parte, así como distintos tratados y conferencias que buscan la implantación de medidas eficaces y reformas legislativas que permitan mitigar los efectos de estos fenómenos naturales.

En ese contexto, también se destaca de manera sobresaliente el Protocolo de Kyoto, que tiene por objeto reducir las emisiones de los gases provocadores del calentamiento global, en aproximadamente 5 por ciento, en el periodo 2008-2012.

La opinión de la comunidad científica sobre estos fenómenos climáticos establece que la temperatura del planeta se ha elevado desde finales del siglo pasado a razón de 1 grado centígrado por año, pero desde 1970 se ha visto este fenómeno con mayor intensidad y en los últimos años es atribuible principalmente a la actividad humana.

Los estudios e investigaciones hechos en laboratorio indican que la principal causa del componente de calor inducido por los humanos se debe al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera.

México también presenta cambios severos generados por el calentamiento global, como la creciente desertificación en el centro y norte del país, la cual afecta principalmente a nuestro Estado; asimismo, la reducción de la producción agrícola, debido a largos periodos de sequía y otros cambios bruscos de temperatura; las inundaciones en lugares cercanos a costas y ríos. De igual forma, la pérdida de biodiversidad que nos presenta una dramática y constante disminución de las selvas y bosques.

Otro ejemplo lo vemos en la generación de incontrolables incendios forestales, estos cambios han provocado diversas dificultades en nuestro Estado, como la disminución de los mantos acuíferos, la erosión de miles de hectáreas, el cambio de los diferentes microclimas que se encuentran en nuestro territorio, el agotamiento de tierras de cultivo, problemas para el suministro de agua en comunidades del Estado de Sonora, incluso el peligro de extinción de diversas especies de flora y fauna.

Los hechos anteriores dejan en claro que la planeación de acciones para preservar el equilibrio ecológico del planeta se ha convertido en un asunto de seguridad mundial, que afecta a todos los habitantes de esta tierra.

Consideramos de gran importancia realizar acciones que ayuden a cuidar y mejorar el medio ambiente, porque con ello contribuiríamos a evitar el cambio climático que sufre nuestro planeta, ya que es de gran importancia para las presentes y las futuras generaciones la preservación del ambiente, conforme lo establece la propia Carta Magna.

México es privilegiado por su gran capital natural y conocido en todo el mundo por su inmensa diversidad biológica, pero enfrenta grandes desafíos en materia de agua, manejo de residuos sólidos, calidad del aire y conservación de suelos. Por ello debemos dejar muy claro en la legislación la importancia de implantar medidas que ayuden a combatir los efectos del daño que le hemos hecho a nuestro entorno.

El Plan Estatal de Desarrollo de nuestro Estado, por su parte establece que es necesario promover una política ambiental que garantice la sustentabilidad de las actividades productivas,

promoviendo una nueva cultura ecológica que garantice un aprovechamiento racional y eficiente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, entre otras.

Nuestro estado alberga una gran estructura ecológica, lo cual representa un reto de gestión, ya que resulta de importancia garantizar su conservación y continuidad.”

Derivado de lo antes expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente dictamen, mismo que se funda en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- En el ámbito de facultades y atribuciones legales y de orden constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, el Gobernador del Estado es competente para iniciar ante la Legislatura Local las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la administración pública y progreso de la Entidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 53, fracción I y 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

SEGUNDA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

TERCERA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo, expedir, aprobar y promulgar, toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo, en los demás casos, estableciéndose que en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, según lo dispuesto por los artículos 52, 63 y 64, fracción XLIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- Corresponde a esta Soberanía velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general, pudiendo concurrir con los demás poderes del Estado y gobiernos municipales, a la consecución de los fines y propósitos que redunden en beneficio de la colectividad, conforme a lo dispuesto por el artículo 64, fracción XXXV y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

QUINTA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte dogmática, establece como una garantía individual de toda persona en nuestro país, el gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 4 de la mencionada norma constitucional.

SEXTA.- En los últimos años, la problemática del deterioro ambiental ha sido objeto de gran atención de los gobiernos de todo el mundo, no sólo por la conciencia del problema en sí, sino por la necesidad de resguardar el equilibrio ecológico y la dependencia que tiene la humanidad porque se conserve. Muchas de las acciones de modernización e industrialización generan procesos negativos e irreversibles al entorno natural, tales como distintas acciones de contaminación, aprovechamiento excesivo de los recursos y destrucción de los ecosistemas.

La solución de la problemática ambiental, su prevención, requiere de la implementación de acciones que modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad.

La urgencia de preservar, conservar y desarrollar los ecosistemas en la Entidad, justifica la generación de acciones que promuevan y dirijan la cultura ecológica en la sociedad sonorenses, así como el establecimiento de una amplia base para la gestión ecológica racional.

Es importante señalar que en la actualidad, en el Estado, se cuenta con la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que fue publicada en el Boletín Oficial el día 3 de de enero de 1991, iniciando su vigencia en el mes de abril de ese mismo año.

A partir de entonces, las leyes federales en materia ecológica y ambiental que, por disposición constitucional, distribuyen competencias entre la Federación, el Estado y los municipios, han sido reformadas en varias ocasiones para hacer frente a situaciones inéditas, o bien, se han promulgado nuevos ordenamientos con esa misma finalidad. Esta situación de desfase con la legislación federal ha provocado que la Ley estatal se encuentre limitada.

En atención a lo anterior, tanto el Ejecutivo Estatal como el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la Transparencia presentaron iniciativas tendientes a la solución de la problemática señalada, el primero mediante la emisión de un nuevo marco normativo en la materia y, los segundos, mediante la modificación de la normativa existente. En dicho sentido, una vez analizados los escritos, esta Comisión llegó a la determinación, en atención a la gran cantidad de disposiciones que busca modificar la iniciativa de los diputados del partido Acción Nacional, de tomar como base la iniciativa del Gobernador del Estado e incluir en ella los aspectos relevantes que se plantea en las modificaciones de los citados diputados.

En razón de lo anterior, de los aspectos que se modificaron o incluyeron dentro del proyecto normativo base, destacan los siguientes:

1.- Se incluye dentro del artículo 2º, que la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio estatal sea considerado como de utilidad pública.

2.- En el artículo 3º, se incluye el concepto de educación ambiental y se le da una acepción más amplia al concepto de la "preservación", con el fin de incluir otros aspectos relevantes a la hora de aplicar las políticas y medidas para la evolución y continuidad de los ecosistemas y los hábitats naturales.

3.- Se amplía el texto del artículo 4º, esto con el fin de que al momento de aplicar o interpretar la ley, materia de este dictamen, se observen los principios y criterios ecológicos contenidos en aquellas leyes que se relacionen con la materia que regula la misma.

4.- Dentro de las facultades de los municipios, por medio del Ayuntamiento, se encuentra en la fracción VII del artículo 8º, la de formular y expedir los programas de ordenamiento municipal, por lo que se tomó la determinación de hacer referencia también a la Ley General y no sólo a esta ley, como originalmente se venía planteando.

Asimismo, se adiciona el presente artículo con dos fracciones nuevas que contemplan que los municipios tendrán participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial en los términos de la norma en estudio y, además, será facultad de los municipios regular el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

5.- Se adiciona tres nuevos principios que deberán tomar en cuenta tanto el Estado como los ayuntamientos en la formulación y aplicación de la política ambiental, referidos a la transversalidad de las políticas públicas, el control y la prevención de la contaminación ambiental y sobre la educación.

6.- Se modifica el texto de la fracción I del artículo 22, con el objeto de incorporar el concepto de áreas verdes al momento de implementar los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en relación con la proporción que deben guardar las áreas verdes con las edificaciones de diversa especie.

7.- Por otra parte, en la fracción IV del artículo 22 se planteaba únicamente el "establecimiento" de medios de transporte colectivo de alta eficiencia energética y ambiental, como criterio en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, por lo que se optó por

agregar la palabra “**uso**”, con el objeto de contar con una herramienta más amplia en la aplicación de este criterio.

8.- Se adiciona que las actividades relacionadas con procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente, serán consideradas prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan.

9.- La fracción II del artículo 32 establece como requisito para aquellos que deseen formar parte del padrón de prestadores de servicios ambientales, los documentos que acrediten la aprobación de una evaluación técnica, por lo que se agrega “conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión”, con la finalidad de darle soporte a la evaluación a que se refiere esta fracción.

10.- En la Sección relativa a los prestadores de servicios ambientales se estimó procedente agregar una disposición en la que se establezca que la Comisión deberá elaborar un programa anual de capacitación y actualización para dichos prestadores, el cual será obligatorio para aquellos que se hayan inscrito en el Padrón, estableciéndose además que, se cancelará su inscripción si no cumplen con el programa.

11.- Se establecen una serie de prohibiciones a realizar en las áreas naturales que hayan sido declaradas como protegidas, como es el interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos o las quemas forestales, entre otras.

12.- En lo relativo al procedimiento de evaluación de la Licencia Ambiental Integral, se estableció un artículo en el cual se contemple la obligación del Estado y de los ayuntamientos, respectivamente, de que cuando reciban una solicitud de Licencia Ambiental Integral está se ponga a disposición de público a través de la Gaceta Ecológica o el Tablón de Avisos, según corresponda.

13.- Se establece como obligación de los organismos operadores o de los prestadores de servicios correspondientes promover la creación de una cultura de cuidado y uso racional del agua en el Estado.

14.- Dentro del Capítulo Cuarto del Título Quinto, se agregó una Sección IV denominada: “INGRESO AL ESTADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL”, con el objeto de evitar la entrada al Estado de residuos peligrosos que pongan en riesgo la salud de la población sonorenses, así como de regular los supuestos en que se lleven a cabo operaciones que impliquen la introducción al Estado de dichos residuos, mediante la implementación de disposiciones claras y eficaces.

15.- En lo que respecta a la integración del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, se estimó oportuno incluir un representante de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado dentro de su integración.

16.- Se incluyó a la promoción de la educación, investigación y cultura ambiental en el Estado, como destinataria de recursos del Fondo Ambiental Estatal.

17.- Dentro de las disposiciones generales del Título relativo a las medidas de control y de seguridad y de las sanciones, se llevaron a cabo diversas modificaciones tendientes a establecer que en todo lo no previsto dentro de esta Ley se aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, recientemente aprobada por esta Legislatura.

18.- se adiciona un artículo séptimo transitorio, con el fin de establecer como una obligación para el Congreso del Estado, la de llevar a cabo las reformas que resulten necesarias en el Código Penal Estatal en materia de delitos ecológicos dentro de los seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

19.- Finalmente, se agrega un artículo octavo transitorio, para imponer al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos de la Entidad la obligación de que, en un plazo no mayor a un año,

emitan los reglamentos y disposiciones de observancia general a que se refiere la ley materia de este dictamen.

En virtud de lo anterior, esta Comisión considera necesaria la aprobación de dicha propuesta para ampliar las facultades estatales y municipales que permitan propiciar el desarrollo sustentable, contando con las bases necesarias para garantizar el derecho a vivir en un ambiente adecuado, así como que se actualice la normatividad para que se contemplen las disposiciones para preservar los lugares ante fenómenos como la contaminación, desde la perspectiva preventiva y correctiva, contribuyendo con ello a cuidar el ambiente del Estado de Sonora y brindando con ello un ambiente sano para todos los sonorenses.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de:

NUMERO 171

**EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE**

**LEY
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
NORMAS PRELIMINARES**

ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- El ejercicio de la competencia del Estado y los municipios en materias de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

II.- La definición de los principios de la política ambiental local y la regulación de los instrumentos para su aplicación;

III.- El ordenamiento ecológico del territorio del Estado;

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento, vigilancia y administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local;

V.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio del Estado que no sean de jurisdicción federal;

VI.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales en el territorio del Estado que sean de jurisdicción local, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

VII.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

VIII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales en materia ambiental; y

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas que correspondan.

ARTÍCULO 2º.- Se considera de utilidad pública:

I.- El ordenamiento ecológico del territorio del Estado;

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica de jurisdicción local;

III.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas;

IV.- El establecimiento de museos, zonas de demostración, zoológicos, jardines botánicos y otras instalaciones o exhibiciones similares relacionados con el objeto de esta ley; y

V.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio del Estado, así como la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I.- Actividades riesgosas: Aquellas actividades que no son consideradas altamente riesgosas por la Federación y que en caso de producirse un accidente en la realización de las mismas ocasionarían una afectación al equilibrio ecológico o al ambiente;

II.- Aguas residuales: Las provenientes de cualquier actividad humana y que por el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes, en detrimento de su calidad original;

III.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;

IV.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;

V.- Áreas naturales protegidas: Las zonas sujetas al régimen de protección estatal o municipal, a fin de preservar ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y en otras áreas del territorio estatal;

VI.- Ayuntamientos: Los órganos de gobierno y administración de los municipios del Estado, en los términos de la Constitución Política Estatal y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal;

VII.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;

VIII.- Comisión o CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora;

IX.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;

X.- Contaminante: Materia o energía en cualesquier de sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique de manera nociva su composición y condición natural;

XI.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;

XII.- Control: La inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;

XIII.- Criterios ecológicos: Lineamientos obligatorios contenidos o derivados de la presente ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;

XIV.- Daño ambiental: Perjuicio que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso;

XV.- Daño a los ecosistemas: Perjuicio resultante de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico;

XVI.- Desarrollo sustentable: Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

XVII.- Desequilibrio ecológico: Alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;

XVIII.- Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;

XIX.- Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida;

XIX BIS.- Emisión: La generación o descarga de materia o energía, en cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte negativamente su salud, composición o condición natural. En materia de cambio climático, es la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero, y/o sus precursores, en la atmósfera, en un área y en un espacio de tiempo específicos;

XX- Equilibrio ecológico: Relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;

XXI.- Establecimiento: Unidad económica asentada en un lugar de manera permanente o temporal y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, que combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora para realizar actividades de producción de bienes, compraventa de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no;

XXII.- Establecimiento industrial: Unidad económica dedicada a la transformación mecánica, física y/o química de materiales y sustancias con el fin de obtener productos nuevos, incluyendo las actividades de maquila, el ensamble de partes y componentes o productos prefabricados, la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros, y el acabado de productos manufacturados;

XXIII.- Establecimiento mercantil: Unidad económica dedicada a la compra y/o venta, sin transformación, de bienes de consumo intermedio o final, para ser vendidos a personas o establecimientos;

XXIV.- Establecimiento de servicios: Unidad económica cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia de su personal, incluyendo las actividades relacionadas con el gobierno y de los organismos internacionales; la recreación, la reparación y/o mantenimiento; operaciones con información y con activos; promoción, representación y defensa de particulares, de asociaciones u organizaciones, públicas o privadas, y de servicios personales;

XXV.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;

XXVI.- Flora silvestre: Las especies vegetales así como hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio nacional, incluyendo las poblaciones y especímenes de estas especies que se encuentran bajo el control del hombre;

XXVII.- Fuente fija: Toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, mercantiles, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera;

XXVIII.- Fuente móvil: Los vehículos de propulsión automotriz como autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, así como los equipos y la maquinaria no fijos con motores de combustión y similares cuya operación genere o pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera;

XXIX.- Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

XXX.- Gran generador de residuos: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XXXI.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;

XXXII.- Jurisdicción local.- Facultades que en materia ambiental competen ejercer al Estado y a los municipios en los términos de esta ley, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales;

XXXIII.- Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XXXIV.- Manejo integral de residuos: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;

XXXV.- Medidas de prevención: Conjunto de acciones que se deberán ejecutar para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente;

XXXVI.- Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que se deberán ejecutar para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas;

XXXVII.- Microgenerador de residuos peligrosos: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XXXVIII.- Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos;

XXXIX.- Parques estatales: Las áreas constituidas, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel estatal, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y la fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien, por otras razones análogas de interés general;

XL.- Pequeño generador de residuos: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XLI.- Plan de manejo de residuos: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;

XLII.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;

XLIII.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;

XLIII Bis.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora;

XLIV.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su deterioro;

XLV.- Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;

XLVI.- Reservas estatales: Las áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;

XLVII.- Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables;

XLVIII.- Residuos de manejo especial: Son desechos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

XLIX.- Residuos peligrosos: Son desechos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

L.- Residuos sólidos urbanos: Los desechos que resultan de la eliminación de los materiales utilizados en actividades domésticas; de los productos que se consumen en las casas habitación o de sus envases o empaques; los que provienen de cualquiera otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que tengan características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole;

LI.- Restauración: Las actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la continuidad de los procesos naturales;

LII.- Tratamiento de aguas residuales: Proceso al que se someten las aguas residuales con el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que contengan;

LIII.- Zonas de preservación ecológica de los centros de población: Las áreas naturales en las que existen uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar general;

LIV.- Calentamiento global: Incremento continuo de la temperatura promedio global;

LV.- Cambio climático: Cambio de clima atribuido directamente o indirectamente a las actividades humanas;

LVI.- Capacidad adaptativa: Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluidas la variabilidad climática y los fenómenos extremos) con el fin de moderar los daños potenciales, de beneficiarse de las oportunidades o de afrontar las consecuencias;

LVII.- Infraestructura verde: Infraestructura polifuncional que utiliza sistemas naturales (o sistemas producto de ingeniería que imitan procesos naturales) para mejorar la calidad ambiental general y proveer servicios ambientales, sociales, económicos y culturales. La cual puede ser usada como componente de un sistema de manejo de agua pluvial cuando el suelo y la vegetación son usados para infiltrar, evapotranspirar, o aprovechar escorrentías;

LVIII.- Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos; y

LIX.- Sensibilidad: Es el grado en que un sistema es potencialmente modificado o afectado por un disturbio, interno, externo o un grupo de ellos.

ARTÍCULO 4º.- En la aplicación e interpretación de la presente ley, deberán observarse los criterios y principios ecológicos previstos en la Ley General, así como las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables a la competencia estatal y en las leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

CAPÍTULO II

DE LAS COMPETENCIAS Y DE LA COORDINACIÓN

ARTÍCULO 5º.- Las atribuciones en las materias objeto de esta ley serán ejercidas por el Estado y los municipios, conforme a las bases establecidas en el artículo 4º de la Ley General.

La distribución de competencias en materia forestal se establece en la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sonora.

La distribución de competencias en materia de cambio climático se establece en la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 6º.- Las atribuciones que esta ley otorga al Estado, serán ejercidas por el Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión o de la Procuraduría, según corresponda a su ámbito de competencia, salvo las que directamente le correspondan a él por disposición expresa de la ley.

Cuando por razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera la intervención de otras dependencias, la Comisión o la Procuraduría, según corresponda, ejercerán sus atribuciones en coordinación con las mismas.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal que ejerzan atribuciones relacionadas con el objeto de la presente ley, ajustarán su ejercicio a los criterios ecológicos establecidos en la misma, en las normas oficiales mexicanas y en los reglamentos, programas de ordenamiento ecológico y demás disposiciones que se deriven de los mismos.

ARTÍCULO 7º.- Corresponde al Estado:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;

II.- La formulación y aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el territorio del Estado, en las materias que no están expresamente atribuidas a la Federación o a los municipios;

III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionan como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles que no sean de competencia federal.

IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General;

V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción del Estado, con la participación de los ayuntamientos;

VI.- La prevención y control del manejo integral de los residuos de manejo especial para el ambiente o los ecosistemas; así como la autorización y el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, en los términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como

establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en la Ley General no sean de competencia federal ni municipal;

VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales que tenga asignadas el Estado;

IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio del Estado a que se refiere la Ley General, con la participación de los municipios respectivos;

X.- La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación;

XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XII.- La atención, en coordinación con la Federación, de asuntos que originados en la entidad afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de otras entidades federativas, de zonas de la jurisdicción de éstas o de otros países, o bien, que originados en otras entidades federativas o países generen efectos ambientales en el Estado;

XIII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIV.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, en las materias de competencia estatal;

XV.- La constitución del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

XVII.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere esta ley y la expedición de las autorizaciones correspondientes;

XVIII.- El establecimiento de zonas de restauración, en las áreas que presenten procesos acelerados de desertificación o degradación, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos;

XIX.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente le transfiera la Federación de conformidad con lo dispuesto en la Ley General;

XX.- La formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal de Protección al Ambiente;

XXI.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XXII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de parques y reservas estatales;

XXIII.- La presentación de las acciones procedentes ante las autoridades competentes de los hechos que puedan constituir ilícitos, materia de esta ley;

XXIV.- Apoyar a los ayuntamientos que así lo soliciten, en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente ley;

XXV.- La aplicación de las sanciones administrativas por violaciones a la presente ley y a las disposiciones que de ella se deriven; y

XXVI.- Las demás que conforme a ésta y otras leyes le competan.

ARTÍCULO 8º.- Corresponde a los municipios, a través de los ayuntamientos:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

I BIS.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

I TER.- Recibir y atender denuncias por violaciones a la presente Ley.

Quando el Ayuntamiento reciba una denuncia que no sea de su competencia o cuando no cuente con los recursos necesarios para atenderla, la remitirá inmediatamente a la Procuraduría para que proceda en términos de la presente Ley.

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al Estado;

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios;

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por el manejo integral de residuos sólidos urbanos;

V.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables a las fuentes móviles, excepto las que conforme a la Ley General sean de jurisdicción federal o estatal;

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a esta ley corresponda al Estado;

VII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico municipal a que se refiere esta ley y la Ley General, así como el control y vigilancia del uso y cambio de uso de suelo establecidos en dichos programas;

VIII.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al Estado;

IX.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

X.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo;

XI.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIII.- La evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades que le competen en los términos de esta ley;

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial en los términos de la presente ley;

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI.- La participación en el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas;

XVII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de zonas de preservación ecológicas de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

XVIII.- La protección de la imagen de los centros de población y las áreas de valor escénico;

XIX.- La concertación con los sectores social y privado de la realización de acciones en las materias de su competencia;

XX.- La aplicación de las sanciones administrativas por violaciones a la presente ley y a las disposiciones que de ellas se deriven;

XXI.- La presentación de las acciones procedentes ante las autoridades competentes de los hechos que puedan constituir ilícitos, materia de esta ley;

XXI BIS.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente le transfiera el Estado de conformidad con lo dispuesto en la Ley General;

XXII.- Regular el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales; y

XXIII.- Las demás que conforme a esta u otras disposiciones jurídicas le correspondan.

ARTÍCULO 9.- El Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a efecto de asumir las funciones de esta última en las materias y conforme a las bases establecidas en la Ley General.

Asimismo, podrá suscribir convenios de coordinación con los Municipios a efecto de que éstos asuman las atribuciones y funciones que la presente ley o los convenios a que se refiere el párrafo anterior le confieran al Estado.

ARTÍCULO 10.- El Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con otros Estados de la Federación con el propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. Las mismas atribuciones podrán ejercer los municipios del Estado entre sí o con municipios de otras entidades federativas; en este último caso se deberá contar con la aprobación del Congreso del Estado.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DE LA FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

ARTÍCULO 11.- El Estado y los ayuntamientos aplicarán en la formulación y conducción de la política ambiental que les corresponda y en la expedición de las disposiciones que deriven de la presente ley, de acuerdo con sus respectivas competencias, los siguientes principios:

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del Estado;

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;

IV.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende las condiciones presentes y las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;

V.- La prevención de las causas que generan los desequilibrios ecológicos es el medio más eficaz para evitarlas;

VI.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;

VII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;

VIII.- La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;

IX.- El sujeto principal de la concertación ecológica son los individuos y los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza;

X.- Los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico que establezca esta ley, la Ley General y demás disposiciones que de ellas se deriven se considerarán por el Estado y los ayuntamientos en la regulación, promoción e inducción de las acciones de los particulares en los campos económico y social;

XI.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos de esta ley y otras disposiciones legales aplicables, tomarán las medidas para preservar ese derecho;

XII.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

XIII.- La transversalidad de las políticas públicas en materia ambiental promueve el desarrollo sustentable mediante la coordinación intersectorial de las estrategias, acciones y metas contenidas en los programas sectoriales, integrando y jerarquizando las políticas públicas e induciendo sinergias entre crecimiento económico, bienestar y sustentabilidad;

XIV.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la

salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine esta ley, la Ley General y otros ordenamientos aplicables;

XV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;

XVI.- Garantizar la completa participación de la mujer en las funciones de protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y para lograr del desarrollo sustentable;

XVII.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; y

XVIII.- La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

CAPÍTULO II **DE LA POLÍTICA AMBIENTAL**

SECCIÓN I **DE LA PLANEACIÓN ECOLÓGICA**

ARTÍCULO 12.- En la planeación del desarrollo serán consideradas la política y el ordenamiento ecológico que se establezcan, de acuerdo con esta ley y las demás disposiciones en la materia.

ARTÍCULO 13.- El Estado y los ayuntamientos promoverán la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con lo establecido en esta ley y en la Ley de Planeación para el Estado de Sonora.

SECCION II **DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO**

ARTÍCULO 14.- Para el ordenamiento ecológico se considerarán los siguientes criterios:

I.- La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ecológica del Estado;

II.- La vocación de cada área o zona en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;

III.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;

IV.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efectos de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; y

V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.

ARTÍCULO 15.- El ordenamiento ecológico será considerado en:

I.- Los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

II.- La fundación de nuevos centros de población;

III.- La creación de áreas naturales protegidas, de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo;

IV.- La ordenación urbana del territorio y los programas para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda;

V.- La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales o que puedan influir en la localización de las actividades productivas;

VI.- Los requisitos para el otorgamiento de apoyos a las actividades productivas que se otorguen por las autoridades de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión;

VII.- Las autorizaciones para la localización y construcción de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios, así como para la operación de las mismas cuando no estén reservadas a la Federación; y

VIII.- El otorgamiento de derechos y permisos provisionales para el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal.

ARTÍCULO 16.- El ordenamiento ecológico del territorio estatal se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico:

I.- Estatal; y

II.- Municipales.

ARTÍCULO 17.- Los programas de ordenamiento ecológico estatal a que se refiere el artículo anterior serán elaborados, aplicados, ejecutados y evaluados por la Comisión y deberán contener, por lo menos:

I.- La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área;

II.- La determinación de las estrategias ecológicas aplicables y de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos;

III.- El análisis y determinación de aptitud sectorial y la vocación de cada zona o región en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;

IV.- Los estilos imperantes en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales de la entidad y sus repercusiones en los sistemas que la integran;

V.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

VI.- Un listado de cada ecosistema descrito, identificando los endemismos, si es que los hubiera, especies de flora y fauna con algún estatus de protección y los lineamientos de acción para su preservación o recuperación claramente definidos, según sea el caso;

VII.- Un balance de los recursos naturales que incluya:

a) Una descripción detallada de la calidad de las cuencas atmosféricas señalando su ubicación geográfica y especificando niveles de concentración de los distintos contaminantes;

b) Descripción de la calidad y cantidad de todas las fuentes de agua, ya sean superficiales o subterráneas, en explotación y potenciales;

- c) Mapas de uso del suelo y procesos de degradación;
- d) Un inventario de las principales fuentes generadoras de residuos;
- e) Un listado de sustancias tóxicas o peligrosas en el ambiente, como compuestos orgánicos, metales y otros compuestos de biodegradación lenta; y
- f) Un sistema de indicadores para cuantificar y evaluar en forma permanente y sistemática el estado que guardan todos y cada uno de los recursos naturales; y

VIII.- Los lineamientos para su ejecución, seguimiento y modificación.

ARTÍCULO 18.- Los programas de ordenamiento ecológico municipales serán expedidos, aplicados, ejecutados y evaluados por las autoridades municipales competentes y tendrán por objeto:

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área;

II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos; y

III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano correspondientes.

ARTÍCULO 19.- Para la realización de los programas de ordenamiento ecológico estatal y municipales, la Comisión y los ayuntamientos deberán realizar los estudios técnicos correspondientes, de acuerdo con las siguientes etapas:

I.- Caracterización, en la que se deberá describir el estado actual de los componentes natural, social y económico del territorio;

II.- Diagnóstico, cuyo objeto es identificar y analizar los conflictos ambientales en el área de estudio;

III.- Pronóstico, en la que se examinará la evolución de los conflictos ambientales, a partir de la predicción del estado futuro de las variables naturales, sociales y económicas que correspondan; y

IV.- Propuesta, que preverá el modelo de ordenamiento ecológico del territorio, en el que se contendrán los lineamientos y estrategias ecológicas.

El proceso de ordenamiento ecológico a que se refiere este artículo, se establecerá en el reglamento respectivo de esta ley, asegurando la participación de las personas y los sectores sociales interesados.

ARTÍCULO 20.- La Comisión y los ayuntamientos podrán modificar los programas de ordenamiento ecológico cuando:

I.- La modificación de los lineamientos ecológicos sea necesaria para la disminución de los conflictos ambientales;

II.- La aplicación de las estrategias ecológicas haya resultado insuficiente para el logro de los lineamientos ecológicos, de acuerdo con los indicadores ambientales respectivos; y

III.- Las perturbaciones en los ecosistemas causadas por contingencias ambientales sean significativas y pongan en riesgo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

ARTÍCULO 21.- Las modificaciones a un programa de ordenamiento ecológico se realizarán siguiendo las formalidades establecidas para la expedición del mismo.

SECCIÓN III

DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

ARTÍCULO 22.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda se considerarán los siguientes criterios:

I.- Los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; así como el cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y, en general, otras actividades;

II.- En la determinación de los usos del suelo se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva;

III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población, y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;

IV.- Se deberá promover y privilegiar el uso y el establecimiento de sistemas de transporte colectivo de alta eficiencia energética y ambiental;

V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos;

VI.- Las autoridades ambientales, en la esfera de sus competencias, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana, de cambio climático y ambiental para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice;

VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas hecha por la autoridad competente, se cuidará que se establezcan las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; y

IX.- La política ambiental debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida.

Las autoridades del Estado y los Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.

SECCION IV

DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

ARTÍCULO 23.- El Estado y los ayuntamientos diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, mediante los cuales se buscará:

I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;

II.- Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía;

III.- Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas asuman los costos respectivos;

IV.- Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental;

V.- Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial cuando se trate de observar límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población; y

VI.- Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los efectos del cambio climático.

ARTÍCULO 24.- Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

ARTÍCULO 25.- Se considerarán prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan, las actividades relacionadas con:

I.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua, incluyendo acciones relacionadas con infraestructura verde;

IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, así como con la valoración del capital natural de dicha área mediante la estimación de sus servicios ecosistémicos;

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente;

VII.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

VIII.- El desarrollo de infraestructura verde; y

IX.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente previstas en éste y en otros ordenamientos aplicables.

SECCIÓN V

DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

ARTÍCULO 26.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar las obras o actividades a que se refiere esta Sección que puedan causar algún daño al ambiente o a los ecosistemas, ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y en las normas oficiales mexicanas para proteger el ambiente deberán contar con la autorización en materia de impacto ambiental de la Comisión o de los ayuntamientos, según corresponda, sin perjuicio de las autorizaciones que deban otorgar otras autoridades.

La autorización en materia de impacto ambiental se solicitará previamente a la ejecución de las obras o actividades respectivas, mediante la Licencia Ambiental Integral a que se refiere el Título Cuarto de esta ley.

Para conceder o negar la autorización a que se refiere este artículo, la Comisión y, en su caso, los ayuntamientos realizarán un análisis de los impactos ambientales manifestados en la Licencia Ambiental Integral que pudieran generar sobre el ambiente las obras o actividades referidas en esta Sección, a fin de evitar o reducir los efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

ARTÍCULO 27.- La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán sobre las solicitudes de autorizaciones en materia de impacto ambiental de las siguientes obras y actividades:

I.- La Comisión:

a) Obra pública estatal;

b) Zonas y parques industriales que no sean de competencia federal;

c) Construcción de establecimientos para usos industriales, que no sean de competencia federal;

- d) Operación de establecimientos industriales, que no sean de competencia federal;
- e) Exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias no reservadas a la Federación;
- f) Desarrollos turísticos o industriales;
- g) Sistemas de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
- h) Nuevos centros de población;
- i) Caminos de jurisdicción estatal;
- j) Explotación y aprovechamiento de animales en todas sus fases en ambientes controlados y no controlados;
- k) Obras y actividades que por su naturaleza y complejidad requieran de la participación del Estado a petición de los ayuntamientos;
- l) Obras y actividades en áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal; y
- m) Las demás que no sean competencia de la Federación o de los ayuntamientos; y

II.- Los ayuntamientos:

- a) Obra pública municipal;
- b) Caminos de jurisdicción municipal;
- c) Construcción de establecimientos para usos mercantil o de servicios;
- d)
+de establecimientos mercantiles o de servicios.
- e) Fraccionamientos y unidades habitacionales;
- f) Desarrollos campestres; y
- g) Cementerios y crematorios.

El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante disposiciones de observancia general que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, podrán exceptuar del requisito de la autorización en materia de impacto ambiental a cualesquiera de las obras o actividades a que se refiere el presente artículo, cuando por la ubicación, magnitud, utilización de materiales u otras circunstancias se considere que las mismas no causarán desequilibrios ecológicos ni rebasarán los límites y condiciones señalados en los reglamentos y normas oficiales mexicanas emitidas por la Federación para proteger el ambiente

ARTÍCULO 28.- Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo anterior, así como con las que se encuentren en operación, conforme al reglamento correspondiente, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

- I.- Las obras y actividades relacionadas con éstas cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando desde un principio no hubieren requerido de ella; y

II.- No impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles; construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno ocupada por la construcción o instalación de que se trate.

En los casos referidos en las dos fracciones anteriores, los interesados deberán solicitar dictamen a la Comisión o al Ayuntamiento, diez días hábiles antes de la realización de dichas obras para que la autoridad analice si las acciones que realizarán encuadran en los supuestos del presente artículo y dictamine positiva o negativamente en un plazo de hasta setenta y dos horas antes del inicio de la obra o actividad.

ARTÍCULO 29.- Las obras o actividades que ante la inminencia de un desastre se realicen con fines preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental; pero en todo caso se deberá dar aviso de su realización a la Comisión, a la Procuraduría o al Ayuntamiento respectivo, según competa, en un plazo que no excederá de setenta y dos horas contadas a partir de que las obras se inicien, con objeto de que tomen las medidas necesarias para atenuar los impactos al medio ambiente, cuando así proceda.

Además del aviso a que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar, dentro de un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la realización de las obras o actividades, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y compensación que se apliquen o se pretendan aplicar como consecuencia de dichas obras o actividades.

ARTÍCULO 30.- Los ayuntamientos deberán otorgar las autorizaciones para el uso de suelo, de acuerdo con el ordenamiento aplicable al desarrollo urbano que se implemente en la localidad de que se trate.

ARTÍCULO 30-BIS.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley, cuando ya haya iniciado una obra o actividad de competencia estatal o municipal, el interesado podrá acudir ante la Comisión o los Ayuntamientos, en su caso, para someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la parte de la obra aún no realizada y de la actividad el proceso no ejecutado, mediante la licencia ambiental integral.

La Comisión o los Ayuntamientos, notificarán a la Procuraduría a fin de que se determine, de ser el caso, las sanciones que procedan en los términos de esta Ley.

SECCIÓN VI

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES

ARTÍCULO 31.- La Comisión y los ayuntamientos establecerán un padrón de prestadores de servicios ambientales.

Se considerarán prestadores de servicios ambientales las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como las instituciones de investigación o asociaciones profesionales que realicen estudios, peritajes, auditorías o trabajos en materia ambiental.

ARTÍCULO 32.- Los interesados en inscribirse en el padrón de prestadores de servicios ambientales presentarán ante la Comisión y, en su caso, al Ayuntamiento correspondiente, una solicitud con la información y documentos siguientes:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del interesado y, en su caso, de su representante legal, así como los documentos que acrediten dicha representación;

II.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del interesado, así como la aprobación de la evaluación técnica que se le aplique, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita previamente la Comisión;

III.- Una relación actualizada y la descripción general de la infraestructura y el equipo con que cuenta; y

IV.- Una relación de los asesores externos o alianzas estratégicas que participen directamente con el interesado.

En el escrito de solicitud se deberán relacionar los documentos que lo acompañen.

La Comisión y los ayuntamientos deberán observar en todo momento las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 33.- La Comisión podrá cancelar en cualquier momento el registro en el padrón de prestadores de servicios ambientales, independientemente de las sanciones de otro tipo que correspondan, por cualquiera de las siguientes causas:

I.- Haber proporcionado información o documentos falsos o incorrectos para su inscripción en el padrón;

II.- Incluir a asesores externos o alianzas estratégicas que no participan directamente con el interesado;

III.- Acompañar en los estudios o proyectos del área ambiental que se presenten, información falsa, incorrecta o no original, o alterar los resultados de dichos estudios o proyectos;

IV.- Presentar de tal manera la información en estudios, exámenes, evaluaciones, estimaciones, determinaciones, cálculos, auditorías, trabajos, análisis y peritajes que induzcan a la autoridad ambiental competente a error o a incorrecta apreciación en la dictaminación correspondiente;

V.- Perder o disminuir la capacidad técnica por la que se obtuvo el registro en el padrón; y

VI.- No cumplir con el programa de capacitación y actualización que para tal efecto emita la Comisión.

ARTÍCULO 34.- El Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el reglamento que establezca las modalidades a que se sujetará la actuación y actividad de los prestadores de servicios ambientales y el procedimiento por el que se cancelará el registro en el padrón.

La Comisión establecerá un programa anual de capacitación y actualización para prestadores de servicios ambientales, el cual deberá ser obligatorio para aquellos que se encuentren inscritos en los padrones a que se refiere esta sección.

ARTÍCULO 35.- La Comisión y los ayuntamientos sólo evaluarán y otorgarán validez a los trabajos y estudios de los prestadores de servicios ambientales que se encuentren inscritos en el padrón respectivo.

SECCIÓN VII

DE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 36.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, y los ayuntamientos establecerán programas sobre cultura ambiental con el objeto de propiciar actitudes y conductas de participación comunitaria en las tareas de protección, conservación y restauración del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y propiciar los conocimientos sobre las causas del deterioro del mismo, así como las medidas para su prevención y control, además de promover la participación individual y colectiva que se puedan tomar para mejorar la calidad ambiental y de vida.

Asimismo, propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.

ARTÍCULO 37.- Todos los habitantes tienen derecho a la educación ambiental, al acceso a la información ambiental y a la utilización de instrumentos de participación ciudadana que posibiliten el mejoramiento de sus condiciones de vida, que involucre a todos los actores sociales que interactúan con las áreas protegidas y los ecosistemas de interés, promueva iniciativas que ofrezcan alternativas de vida a las comunidades, supere los límites del conservacionismo e incorpore otras dimensiones de la sustentabilidad y sea capaz de prevenir problemas.

ARTÍCULO 38.- El Estado y los ayuntamientos promoverán la incorporación de contenidos de carácter ecológico en el sistema educativo estatal, especialmente en los niveles básico y medio superior. Asimismo, fomentarán la realización de acciones de concientización y cultura ecológicas que propicien el fortalecimiento de la educación ambiental de la población.

La Comisión en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura establecerán un conjunto de recomendaciones y directrices tendientes a que las autoridades e instituciones educativas y culturales, públicas y privadas, introduzcan en los procesos educativos formales y no formales, así como en los sistemas de capacitación de la administración pública y empresariales y en los medios de comunicación, contenidos y metodologías para el desarrollo en la población de conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientados a favorecer las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable, la conservación y restauración de los recursos naturales y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

ARTÍCULO 39.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, y con la participación de las autoridades competentes, promoverán ante las instituciones de educación superior en el Estado y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de programas para la formación de profesionales en la materia y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales en el Estado; así como programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, mitigar y adaptarse al cambio climático y proteger los ecosistemas de la entidad.

Para llevar a cabo dichas actividades, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

ARTÍCULO 40.- El Estado promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene a que se refiere la legislación laboral.

ARTÍCULO 41.- La Comisión impulsará la transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable para cumplir con este objetivo promoverá y participará en la concertación y seguimiento de medidas, acciones y proyectos entre las dependencias de la administración pública estatal y con otros órdenes de gobierno, que tengan como eje el desarrollo de políticas públicas para el desarrollo humano sustentable.

La Comisión deberá de concertar acciones y proyectos con la administración pública estatal, en la que se incluirán actividades conjuntas para promover el desarrollo sustentable. Las acciones concertadas deben de reflejarse en indicadores y metas que permitan la cuantificación de los logros alcanzados.

ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal deberán considerar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental que propicien el desarrollo sustentable y ocasionen cambios en los patrones de conducta, producción y de consumo que ayuden a mejorar las condiciones del medio ambiente en la elaboración de:

- I.- Sus programas operativos anuales;
- II.- Sus proyectos anuales de presupuestos de egresos, y
- III.- Sus programas anuales de obra pública y adquisiciones.

SECCIÓN VIII

AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES

ARTÍCULO 43.- Los productores, los establecimientos y organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

La Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inducirán o concertarán:

I.- El desarrollo de procesos productivos y actividades de establecimientos adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia convenidos con cámaras de industria, comercio, servicios y otras actividades productivas, organizaciones de productores, comerciantes y de prestadores de servicios, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas;

II.- El cumplimiento de normas o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen, en las que se prevean acciones más estrictas que las contenidas en las normas oficiales mexicanas y los criterios ecológicos, o que se refieran a aspectos no establecidos por éstos;

III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y

IV.- Las demás acciones que induzcan a alcanzar los objetivos de la política ambiental, superiores a las previstas en la normatividad ambiental.

ARTÍCULO 44.- Los responsables del funcionamiento de los establecimientos podrán, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental, de los parámetros internacionales y de las buenas prácticas de operación, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente, que se establecerán en un plan de acción de mejoramiento ambiental.

Las auditorías ambientales a que se refiere este artículo serán voluntarias, éstas y el proceso de certificación respectivo serán gestionados ante la Procuraduría y se llevarán a cabo en los términos que establezca el reglamento respectivo de esta ley. La Comisión, la Procuraduría o, en su caso, los ayuntamientos reconocerán los compromisos y medidas establecidas en el plan de acción correspondiente, y podrán estimular el cumplimiento oportuno de los mismos.

Los costos de las auditorías, así como los gastos generados por la ejecución del plan de acción, correrán por cuenta de los responsables de los establecimientos de que se trate.

ARTÍCULO 45.- La Comisión y los ayuntamientos promoverán la celebración de los convenios respectivos con el propósito de que las auditorías ambientales que se realicen en el

Estado en los términos de esta Sección, se desarrollen en coordinación con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, para que éstas, de forma conjunta o indistinta, reconozcan y estimulen los resultados que se obtengan de las mismas.

SECCIÓN IX **DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL**

ARTÍCULO 45 BIS.- Es obligación del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la CEDES, evaluar los programas y las políticas públicas que implemente en la materia de esta Ley. Para cumplir con este propósito, la CEDES conformará un sistema de indicadores que permita medir los impactos y resultados alcanzados. Será obligación del Poder Ejecutivo Estatal y la CEDES considerar estas evaluaciones en el diseño y planeación de políticas públicas y programas en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.

El sistema de indicadores, que deberá, considerar al menos los siguientes parámetros:

- a).- Nombre de cada indicador.
- b).- Objetivo de cada indicador.
- c).- Alineación con los planes nacional y estatal de desarrollo.
- d).- Unidad de medida.
- e).- Año base del que se parte.
- f).- Meta a cumplir: Se establecerán metas a corto, mediano y largo plazos, considerando metas a cumplir durante el sexenio y para periodos más largos de tiempo.
- g).- Descripción y método de cálculo.
- h).- Periodicidad de emisión de los resultados.
- i).- Ámbito del indicador: Estatal y/o municipal.
- j).- Fuentes para la obtención de datos.

A continuación se señalan indicadores que mínimamente comprenderá el citado sistema, pudiéndose incluir otros que el Poder Ejecutivo Estatal o la CEDES considere convenientes:

- a).- Reducción de niveles de contaminación del aire, agua y tierra.
- b).- Incremento en el nivel de utilización de energías limpias y renovables para el consumo doméstico, industrial y gubernamental.
- c).- Reducción de emisión de gases de efecto invernadero por uso de combustibles fósiles.
- d).- Incremento en la producción de biogás a partir de desechos.
- e).- Incremento en el volumen de tratamiento de aguas residuales.
- f).- Reducción de superficies sujetas a riesgos por manejo de materiales y residuos peligrosos o tóxicos.
- g).- Reducción de superficies afectadas por incendios, plagas o enfermedades.

h).- Incremento de superficies restauradas o rehabilitadas para la vegetación natural y suelos.

l).- Incremento de superficies destinada a la conservación de la vida silvestre.

j).- Incremento de superficies con ordenamientos ecológicos o programas de desarrollo urbano con criterios de cambio climático.

k).- Incremento en la generación de empleos verdes, los cuales son aquellos relacionados con cualquier tipo de actividad productiva que protegen y benefician al medio ambiente o aprovechan sustentablemente los recursos naturales mediante sus procesos productivos, la producción de bienes finales y acciones de prevención o disminución del daño ambiental.

El sistema de indicadores, así como los resultados obtenidos, serán publicados en la página oficial en internet de la CEDES.

TÍTULO TERCERO

DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

CAPÍTULO I

DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 46.- En los términos de ésta y de las demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio estatal a que se refiere el presente Capítulo, podrán ser materia de protección como reservas ecológicas para los propósitos y con los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisen, mediante la imposición de las limitaciones que determine el Estado, para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos social y racionalmente necesarios.

El establecimiento de áreas naturales protegidas es de interés público. En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población ni la ampliación de los ya constituidos.

ARTÍCULO 47.- Se consideran áreas naturales protegidas:

A) De jurisdicción estatal:

I.- Los parques y reservas estatales; y

II.- Las que tengan ese carácter conforme a las leyes.

B) De jurisdicción municipal:

I.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población; y

II.- Las que tengan ese carácter conforme a las leyes.

ARTÍCULO 48.- La determinación de áreas naturales protegidas, de jurisdicción estatal o municipal, tendrá como propósito:

I.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los ecosistemas y, en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III.- Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

IV.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, geológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad estatal y nacional, así como de los pueblos indígenas;

V.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; y

VI.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del Estado.

ARTÍCULO 49.- En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere este Capítulo, la Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores; de los pueblos indígenas y de organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

ARTÍCULO 50.- La Comisión y los ayuntamientos podrán promover ante el Gobierno Federal el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que se establezcan de conformidad con esta ley, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.

ARTÍCULO 51.- La Comisión constituirá un Comité Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de la misma, de la Procuraduría, de otras dependencias y entidades del Estado y de los municipios relacionadas con la materia ambiental, y, a invitación de la Comisión, por representantes de la administración pública federal; así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, y personas físicas de reconocido prestigio en la materia.

El Comité fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, y funcionará en los términos previstos en el reglamento respectivo.

El Comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos municipales que no estén representados en el Comité, cuando se trate de áreas naturales protegidas de competencia estatal que se encuentren dentro de su territorio. Así mismo, podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y, en general, a cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate.

SECCION II

DE LAS DECLARATORIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 52.- Las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal se establecerán conforme a esta ley, mediante:

I.- Declaratorias del Gobernador del Estado, tratándose de parques y reservas estatales; y

II.- Declaratorias de los ayuntamientos, tratándose de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por esta ley.

Cuando las áreas naturales protegidas abarquen centros de población pertenecientes a dos o más municipios, corresponderá al Gobernador del Estado emitir las declaratorias respectivas.

ARTÍCULO 53.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, se deberán realizar los estudios que las justifiquen, los que deberán contener la información general del área de que se trate, en la que se incluirá, por lo menos, la evaluación ambiental, el diagnóstico de dicha área y la propuesta de manejo de la misma.

Simultáneamente a la elaboración del estudio de justificación, la Comisión o el Ayuntamiento respectivo solicitarán la opinión de las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal que deban intervenir de acuerdo con sus respectivas competencias; de organizaciones sociales públicas o privadas; pueblos indígenas; universidades, centros de investigación, instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, así como de las demás personas físicas o morales interesadas en dichas áreas.

Los estudios y el resultado de la consulta deberán tomarse en cuenta, en lo que sean procedentes, por la Comisión o, en su caso, la autoridad ambiental municipal respectiva, antes de proponer a la autoridad competente la declaración de área natural protegida.

ARTÍCULO 54.- Una vez concluidos los estudios previos justificativos, éstos deberán ser puestos a disposición del público para su consulta, por un plazo de diez días naturales contados a partir del día en que se hayan terminado, en las oficinas de la Comisión o el Ayuntamiento correspondiente y en los medios electrónicos de que dispongan. Para tal efecto, dichas autoridades ambientales darán a conocer esta circunstancia mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación estatal el primer día en que puedan ser consultados.

La opinión del público deberá ser tomada en cuenta, en lo que resulte procedente, por la Comisión o el Ayuntamiento antes de declarar el establecimiento del área natural protegida.

ARTÍCULO 55.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas contendrán los siguientes elementos:

I.- La delimitación precisa de las áreas, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente. Tratándose de centros de población, dicha zonificación deberá ser congruente con la zonificación contenida en los programas municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano;

II.- Las modalidades a que se sujetarán dentro de las áreas, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general, y específicamente de aquéllos sujetos a protección;

III.- La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en las áreas correspondientes y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;

IV.- La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, de conformidad con la Ley de la materia, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución;

V.- Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos y la elaboración del programa de manejo del área; y

VI.- Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas; para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables.

ARTÍCULO 56.- En las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la declaratoria; así como las siguientes:

I.- Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;

II.- Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;

III.- Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal;

IV.- Introducir ejemplares o poblaciones exóticas de la vida silvestre, así como organismos genéticamente modificados;

V.- Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven;

VI.- El uso y las prácticas agrícolas que perjudiquen los suelos, las aguas y el medio ambiente;

VII.- Las quemas forestales; y

VIII.- Cualquier otra actividad que destruya o amenace destruir los recursos naturales o culturales.

ARTÍCULO 57.- Las declaratorias deberán publicarse en algún medio de comunicación masiva en el Estado y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se notificarán a los propietarios o poseedores de los predios afectados en forma personal cuando se conozcan sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación.

Las declaratorias se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad.

ARTÍCULO 58.- Una vez establecida una área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su caso, los usos del suelo permitidos, por determinación del Gobernador del Estado o del Ayuntamiento respectivo, según corresponda, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta ley para la expedición de la declaratoria respectiva.

ARTÍCULO 59.- La Comisión o el Ayuntamiento, según corresponda, dentro del plazo señalado por las declaratorias respectivas, formularán el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos y, en su caso, a organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas. Asimismo, designarán al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven.

ARTÍCULO 60.- El programa de manejo a que se refiere el artículo anterior deberá contener, por lo menos:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida;

II.- Los objetivos específicos del área natural protegida y las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con los programas estatales o municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico respectivos;

III.- La forma en la que se organizará la administración del área, y los mecanismos de participación de la sociedad en su protección y aprovechamiento sustentable, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

IV.- La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a las actividades a que esté sujeta el área; y

V.- Los inventarios existentes y los que se prevea realizar, así como las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollan en el área natural protegida.

La Comisión y los ayuntamientos deberán publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado un resumen del programa de manejo y el plano de localización del área respectiva.

ARTÍCULO 61.- La Comisión, en coordinación con las autoridades estatales competentes, y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán:

I.- Promover inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas;

II.- Establecer o, en su caso, promover la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas;

III.- Establecer incentivos económicos y, en su caso, estímulos fiscales para las personas y las organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, así como para quienes aporten recursos para tales fines;

IV.- Promover ante la autoridad federal competente, que en la distribución de las participaciones federales destinadas a los estados y los municipios se considere como criterio la superficie total que cada uno de éstos destine a la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad; y

V.- Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas.

ARTÍCULO 62.- La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas, de conformidad con lo que establece esta ley, las declaratorias y los programas de manejo correspondientes. Asimismo, verificarán que los titulares cumplan con los términos bajo los cuales les fueron otorgadas dichas concesiones, permisos o autorizaciones.

Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.

ARTÍCULO 63.- La Comisión y los ayuntamientos, por sí mismos o a solicitud de la Procuraduría, podrán suspender de manera temporal o permanente, parcial o total, las concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el artículo anterior cuando:

I.- No se cumplan con las obligaciones y las condiciones establecidas en ellas;

II.- Se causen daños a los ecosistemas como consecuencia del uso o aprovechamiento; y

III.- Se infrinjan las disposiciones de esta ley, del programa de manejo del área protegida y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 64.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o a cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener referencias de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Los notarios y cualesquier otros fedatarios públicos, sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.

Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.

ARTÍCULO 65.- Los ingresos que la Comisión perciba por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, se destinarán al Fondo Ambiental Estatal a que se refiere el artículo 190 de esta ley, y se aplicarán en la preservación y restauración ecológicas de las áreas que los hubieren generado.

ARTÍCULO 66.- La Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos podrán celebrar acuerdos de coordinación entre sí, para efecto de determinar la participación que les corresponda en la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas que se establezcan, así como convenios de concertación con los sectores social y privado para los mismos efectos.

La Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisarán y evaluarán el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con la participación de los ayuntamientos, integrará el Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en el que deberán inscribirse las declaratorias de áreas naturales protegidas, sus modificaciones y los datos de las inscripciones de éstas en el Registro Público de la Propiedad.

SECCIÓN III DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN

ARTÍCULO 68.- Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales públicas o privadas, pequeños propietarios, ejidos y comuneros, personas físicas o morales interesadas podrán voluntariamente solicitar a la Comisión la certificación correspondiente para destinar los predios que les pertenezcan a acciones de preservación, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad representados en el Estado mediante el uso de herramientas legales de conservación.

ARTÍCULO 69.- La determinación de áreas de conservación deberá tener como propósito:

I.- Coadyuvar con el Gobierno del Estado y de los ayuntamientos en la preservación de los ambientes naturales representativos de los diferentes ecosistemas, para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;

III.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos;

IV.- Preservar en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y al bienestar general;

V.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

VI.- Proteger los entornos naturales de zonas geológicas, monumentos y vestigios históricos, arqueológicos y artísticos de importancia para la cultura e identidad del Estado; y

VII.- Regenerar los recursos naturales.

ARTÍCULO 70.- Se consideran áreas de conservación:

I.- Las servidumbres ecológicas, constituidas mediante el acuerdo de dos o más propietarios de los predios que se pretenden someter a un régimen de protección, para limitar el tipo o intensidad de uso de uno o más de dichos predios, con el fin de preservar sus atributos naturales y bellezas escénicas;

II.- Las reservas privadas de conservación, conformadas con terrenos de propiedad privada que por sus condiciones biológicas o por sus ambientes originales no alterados significativamente por la acción del hombre se destinan a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general;

III.- Las reservas rurales, establecidas en terrenos ejidales o comunales que por sus condiciones biológicas o por sus ambientes originales no alterados significativamente por la acción del hombre se destinan a la conservación, preservación y protección de tierras comunales;

IV.- Los jardines privados de conservación o regeneración de especies, conformados por áreas de propiedad privada destinadas a la conservación o regeneración de germoplasma de variedades nativas de una región;

V.- Las tierras sujetas a contratos de conservación, constituidas en terrenos de propiedad privada o social sobre los que sus propietarios limitan los derechos de uso o constituyen cargas de carácter real con el objeto de conservar, preservar, proteger y restaurar sus atributos naturales o ecológicos en favor de terceros; y

VI.- Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 71.- Para el establecimiento de un área de conservación se deberá contar con el certificado de reconocimiento respectivo expedido por la Comisión. Dicho certificado deberá contener, por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área que se pretenda someter al régimen de conservación; su ubicación, superficie y colindancias; el tipo de área que se establezca de acuerdo con el artículo anterior; los términos y condiciones a los que se sujetaría dicha área y, en su caso, el plazo de vigencia del mismo.

ARTÍCULO 72.- Los interesados en obtener un Certificado de Reconocimiento de Área de Conservación, deberán presentar ante la Comisión:

I.- Solicitud por escrito que contenga nombre, denominación o razón social, de quien gestione el establecimiento del área de conservación;

II.- En caso de personas morales, la documentación que acredite la personalidad jurídica de su representante legal. Tratándose de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades rurales las solicitudes deberán ser presentadas por su representante y acompañarse del acta de asamblea correspondiente;

III.- Documento que acredite la propiedad del predio o, en su caso, el documento mediante el cual el propietario le otorga al poseedor del mismo la autorización para promover ante la Comisión el certificado correspondiente;

IV.- Tipo de área de conservación que se propone establecer según los elementos naturales que justifiquen su protección;

V.- Denominación del área, en su caso, así como descripción de sus características físicas y biológicas;

VI.- Superficie y colindancias con un plano de ubicación, preferentemente georreferenciado y con fotografías del predio;

VII.- Propuesta de actividades a regular;

VIII.- Acciones de manejo del área a cargo del promovente o promoventes;

IX.- Acreditar la viabilidad financiera; y

X.- La información complementaria que desee proporcionar el promovente.

Una vez recibida la solicitud para el establecimiento de un área de conservación, la Comisión integrará un expediente y, en su caso, efectuará una visita de campo en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir del día de la recepción.

La resolución de dicha solicitud se emitirá en los términos que se prevean en el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 73.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, podrá llevar a cabo acciones de supervisión técnica y monitoreo para constatar que las acciones de manejo del área se realicen en los términos previstos en el Certificado de Reconocimiento de Área de Conservación. Asimismo, podrá apoyar a los responsables del área de conservación en la conservación, administración y vigilancia de los predios a que se refiere la presente Sección.

ARTÍCULO 74.- La Comisión podrá prorrogar la vigencia de los certificados de reconocimiento hasta por un plazo igual al autorizado originalmente, cuando así lo soliciten sus titulares con una anticipación mínima de dos meses previos a su vencimiento, y siempre que hayan cumplido con los términos y obligaciones establecidos en el mismo.

De igual forma, la vigencia de los certificados puede darse por terminada anticipadamente a solicitud de sus titulares, por imposibilidad justificada para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas o por así convenir a sus intereses.

ARTÍCULO 75.- La Comisión, por sí misma o a solicitud de la Procuraduría, podrá, en todo momento, revocar el certificado expedido, por cualquiera de las siguientes causas:

I.- Cuando el predio se vea alterado por desastres naturales como huracanes, ciclones, incendios, sismos, terremotos o por eventos antropogénicos y no se cumpla con los objetivos de la certificación; y

II.- Cuando sus titulares incumplan con el régimen de manejo autorizado o con cualquiera otra de las obligaciones establecidas en el certificado.

ARTÍCULO 76.- La Comisión, en coordinación con las autoridades estatales competentes, en su caso, y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán:

I.- Promover inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de áreas de conservación;

II.- Establecer o, en su caso, promover mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas; y

III.- Promover el otorgamiento de incentivos económicos y estímulos fiscales para quienes destinen sus predios a acciones de preservación, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.

ARTÍCULO 77.- La Comisión operará el Sistema Estatal de Áreas de Conservación, que se integrará con las áreas a que se refiere el artículo 70 de esta ley, y llevará el Registro de dichas áreas, en el que deberán consignarse los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como los de los certificados de reconocimiento respectivos.

CAPÍTULO II DE LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN

ARTÍCULO 78.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, con base en los estudios que así lo justifiquen, expedirán declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración de aquellas áreas que presenten procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos.

Dichas declaratorias podrán comprender de manera parcial o total predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I.- La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando su superficie, ubicación y deslinde;

II.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;

III.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV.- Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas; y

V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.

Las declaratorias deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.

ARTÍCULO 79.- La Comisión y los ayuntamientos formularán y ejecutarán los programas de restauración ecológica a que se refiere el artículo anterior, con el propósito de que se efectúen las acciones necesarias para la recuperación y el restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que se desarrollaban en las zonas declaradas.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Comisión y los ayuntamientos promoverán la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal que en virtud de sus atribuciones deban hacerlo, de propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas interesadas en la restauración ecológica.

ARTÍCULO 80.- La Comisión y los ayuntamientos podrán suscribir entre sí acuerdos de coordinación a efecto de conjuntar recursos y acciones para revertir en las zonas declaradas para restauración, los procesos de degradación o desertificación, o los graves desequilibrios ecológicos.

ARTÍCULO 81.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 78 quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.

Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.

TÍTULO CUARTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL

CAPÍTULO I OBJETO Y PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL

ARTÍCULO 82.- Los interesados en llevar a cabo cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización u otro acto administrativo similar en materia ambiental deberán tramitarlos mediante la Licencia Ambiental Integral, que presentarán ante la Comisión o los ayuntamientos, según corresponda, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Quedan exceptuados de tramitarse a través de la Licencia Ambiental Integral, los permisos y autorizaciones requeridos por esta ley para la combustión a cielo abierto y la operación de los centros de verificación vehicular, así como los registros de microgeneradores de residuos peligrosos, la prestación del servicio de transporte de residuos de manejo especial, y de generadores de residuos de manejo especial, a que se refieren los artículos 116, 121, 153 y 156, respectivamente, de esta ley.

Los registros señalados en el párrafo anterior deberán ser solicitados mediante el formato que la Comisión determine, el cual considerará al menos los datos generales de la empresa, los tipos y volúmenes de generación anual de dichos residuos, la forma de almacenaje y su destino, no eximiéndolos de seguir los señalamientos establecidos de manera general para el manejo de estos residuos y de poder ser inspeccionados.

La Comisión hará del conocimiento de los Ayuntamientos la solicitud, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de la recepción de ésta; lo anterior, a efecto de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día en que se haga de su conocimiento, manifiesten lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 83.- La Licencia Ambiental Integral es el documento que concentra todos los actos administrativos señalados en el artículo anterior, con el objeto de otorgarlos mediante un solo procedimiento.

La Licencia Ambiental Integral se otorgará sin perjuicio de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás actos similares que se deban tramitar ante autoridades distintas a las ambientales para la realización de las obras o actividades a que se refiere la presente ley.

ARTÍCULO 84.- Para obtener la Licencia Ambiental Integral los interesados deberán presentar una solicitud, en la que se contenga, cuando menos, la documentación e información siguiente:

- I.- Datos del promovente y del responsable técnico;
- II.- Descripción detallada de las obras o actividades por etapa del proyecto;
- III.- Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables;
- IV.- Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región;
- V.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos y riesgos ambientales;

VI.- Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales;

VII.- Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas; y

VIII.- Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados.

La Comisión y los ayuntamientos proporcionarán, a solicitud de los interesados, las guías que emitan para facilitar la presentación y entrega de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, de acuerdo con el tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo.

ARTÍCULO 85.- Cuando existan normas oficiales mexicanas, criterios ecológicos u otras disposiciones que regulen el aprovechamiento de recursos naturales, las emisiones, descargas y, en general, todos los impactos y riesgos ambientales relevantes que se puedan producir en el desarrollo de una obra o actividad, el responsable de ésta podrá presentar una solicitud simplificada de Licencia Ambiental Integral, misma que deberá contener la información señalada en las fracciones I, II, III y VI del artículo anterior.

SECCIÓN I

PUBLICIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y CONSULTA PÚBLICA

ARTÍCULO 85-A.- Una vez que la Comisión y, en su caso, los ayuntamientos reciban una solicitud de Licencia Ambiental Integral pondrán a disposición del público en general, por los medios electrónicos de los que dispongan, un resumen del proyecto, que contendrá: los datos del promotor; la denominación de la obra o actividad de que se trate; ubicación, identificación y descripción de los impactos y riesgos ambientales; y por último, las estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales.

La Comisión y los Ayuntamientos, al recibir una solicitud de Licencia Ambiental Integral integrarán el expediente respectivo en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del término concedido a los ayuntamientos en el último párrafo del artículo 82 de la presente ley.

Los promoventes de la Licencia Ambiental Integral podrán requerir que se mantenga en reserva la información integrada al expediente, que de hacerse pública pudiera afectar derechos de propiedad industrial o la confidencialidad de la información comercial aportada, conforme a las formalidades establecidas en el reglamento de esta Ley en materia de Licencia.

Dicho requerimiento de reserva deberá ser presentado por los interesados, por escrito al momento de presentar la solicitud de la Licencia Ambiental, adjuntando anexos mediante los cuales sustenten y respalden su petición. La autoridad competente, deberá resolver en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

ARTÍCULO 85-B.- La Comisión y, en su caso, los ayuntamientos, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá someter el proyecto a consulta pública, conforme a los lineamientos que para tal efecto establezca el reglamento de esta ley en materia de Licencia Ambiental Integral, así como a las siguientes bases:

I.- La solicitud de consulta pública se deberá presentar por escrito ante la Comisión o el Ayuntamiento correspondiente, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la publicación del resumen general del proyecto de la Licencia Ambiental Integral a que se refiere el artículo 85-A, en los términos y con los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento de esta ley en materia de Licencia Ambiental Integral;

II.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de consulta pública, se notificará a las partes, tanto al solicitante de la consulta como al

promoviente de la Licencia Ambiental Integral, la determinación de someterla al proceso de consulta pública;

III.- En caso de llevar a cabo la consulta pública, se le requerirá al promoviente de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, para que en un término no mayor de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, publique un extracto de la obra o actividad, el cual será el mismo que el que se ponga a disposición del público como lo señala el artículo 85-A, en un periódico de amplia circulación en la entidad. De no realizarse esta publicación se desechará el trámite de solicitud de Licencia Ambiental Integral;

IV.- La Comisión y, en su caso, los ayuntamientos suspenderán el plazo para la integración del expediente, cuando decidan llevar a cabo la consulta pública, esta determinación relacionada con la suspensión de plazos, se le notificará a las partes;

V.- Una vez publicado el extracto del proyecto en el periódico de mayor circulación, cualquier interesado dentro del plazo de diez días contados a partir de dicha publicación, podrá solicitar a la Comisión o al Ayuntamiento, ponga a disposición del público la Licencia Ambiental Integral o la manifestación de impacto ambiental y los documentos en que se sustenta, con el objeto de que puedan informarse sobre el proyecto en cuestión;

VI.- Durante el proceso de consulta pública, la Comisión o el Ayuntamiento, podrá organizar una reunión pública de información cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas en la que el promoviente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate, de conformidad con las siguientes bases:

A.- La Comisión o el Ayuntamiento correspondiente, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que resuelva dar inicio a la consulta pública, emitirá una convocatoria en la que expresará el día, la hora y el lugar en que la reunión deberá verificarse. La convocatoria se publicará, por una sola vez, en el tablero de avisos, en los medios electrónicos disponibles y en un periódico de amplia circulación en el Estado.

B.- La reunión deberá efectuarse, en todo caso, dentro de un plazo no mayor a cinco días con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria y se desahogará en un solo día;

VII.- Cualquier interesado, a partir de que se ponga a disposición del público la Licencia Ambiental Integral, o bien en la reunión a que se refiere la fracción VI de este artículo, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, las cuales serán analizadas por la Comisión o el Ayuntamiento correspondiente.

El proceso de consultas públicas y propuestas formuladas durante la misma, deben incorporarse al expediente correspondiente, y la autoridad competente resolverá si serán vinculantes o no, respecto a la resolución que emita; sólo podrán ser vinculantes en los siguientes casos:

a) Cuando haya quedado plenamente demostrado que la obra o actividad a evaluar, pudiera representar alteraciones de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos (desequilibrio ecológico);

b) Daño al ambiente, a los ecosistemas y a la salud pública; y

c) Las medidas de prevención y mitigación propuestas, son las procedentes para atenuar los impactos al ambiente.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL

ARTÍCULO 86.- Dentro del plazo de diez días destinado para la integración del expediente, la Comisión y los Ayuntamientos, en su caso, podrán solicitar a los interesados las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de las solicitudes de Licencia Ambiental Integral presentadas, debiendo éstos atenderlas dentro del término de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que las autoridades las hubieran notificado.

Cuando la solicitud de Licencia Ambiental Integral no cumpla con los requisitos exigidos por esta ley, la autoridad prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o, en su caso, a su representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles subsane la falta; en el mismo acto podrá, si así se le hubiere requerido, hacer las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones a que se refiere el párrafo anterior.

En el supuesto de que en el término de cinco días establecido en este artículo no se subsane la irregularidad o no se efectúen las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones requeridas, la autoridad resolverá que se tiene por no presentada la solicitud de Licencia Ambiental Integral.

Contra el desechamiento o la negativa de dar trámite a la solicitud, procederá el recurso de inconformidad previsto en esta ley.

ARTÍCULO 87.- Cuando así lo consideren necesario, la Comisión o en su caso, los ayuntamientos podrán realizar visitas de verificación física al lugar donde se pretenda ejecutar la obra o realizar la actividad, a efecto de constatar la autenticidad de la información y documentación presentada con la solicitud de Licencia Ambiental Integral, cuyos resultados deberán quedar consignados en la resolución que dicten sobre dicha solicitud.

ARTÍCULO 88.- El procedimiento de evaluación de la Licencia Ambiental Integral no podrá exceder de diez días hábiles posteriores a la fecha en que quede integrado el expediente.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Comisión o los ayuntamientos requieran de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por veinte días hábiles adicionales, previa notificación al interesado por parte de la Comisión o el ayuntamiento respectivo.

Cuando derivado de la evaluación la autoridad determine que es necesario allegarse de información complementaria, procederá a requerirla en cualquier momento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, a efecto de que quien la posea la otorgue en el término de tres días hábiles

ARTÍCULO 89.- Se deroga.

ARTÍCULO 90.- Se deroga.

ARTÍCULO 91.- En la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, se considerarán, entre otros, los siguientes elementos:

- I.- El ordenamiento ecológico;
- II.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas;
- III.- Los criterios ecológicos para la protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas; para el aprovechamiento racional de los elementos naturales, y para la protección al ambiente;
- IV.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos; y

V.- Los reglamentos y las normas oficiales mexicanas de las materias que regulan la Ley General y el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 92.- En la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral de obras o actividades que se pretendan realizar en áreas naturales protegidas de jurisdicción local, se considerará, además de lo dispuesto en el artículo anterior:

- I.- Las disposiciones que regulen el sistema estatal de áreas naturales protegidas;
- II.- Las normas generales de manejo para áreas naturales protegidas de jurisdicción local;
- III.- El programa de manejo del área natural protegida correspondiente; y
- IV.- Las normas oficiales mexicanas y los criterios ecológicos específicos del área considerada.

ARTÍCULO 93.- Para la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental Integral de obras o actividades que por sus características hagan necesaria la intervención de otras dependencias o entidades de la administración pública estatal o municipal, la Comisión o los ayuntamientos solicitarán a éstas la formulación de un dictamen técnico al respecto.

ARTÍCULO 94.- La Comisión remitirá al Ayuntamiento que corresponda, copia de los expedientes de las solicitudes de Licencia Ambiental Integral que reciba, cuando correspondan a proyectos para realizar actividades riesgosas en su circunscripción territorial, a efecto de que la autoridad ambiental municipal manifieste su opinión al respecto, dentro del término de cinco días hábiles posteriores a la recepción. De no emitir la opinión solicitada en el tiempo señalado, se entenderá que el Ayuntamiento considera aceptable la realización de la actividad en su circunscripción.

ARTÍCULO 95.- Tratándose de la solicitud simplificada a que se refiere el artículo 85 de esta ley, la Comisión y los ayuntamientos otorgarán la Licencia Ambiental Integral respectiva a los interesados en un término no mayor de veinte días hábiles posteriores a la recepción de dicha solicitud, cuando se encuentren en los supuestos de dicho artículo. En caso contrario, las autoridades ambientales los requerirán para que presenten la solicitud de Licencia Ambiental Integral en los términos previstos en el artículo 84 de esta ley.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se emita la resolución correspondiente, se entenderá que las obras o actividades podrán llevarse a cabo en la forma proyectada y de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, criterios ecológicos y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 96.- La Comisión y los ayuntamientos evaluarán los posibles efectos que las obras o actividades pudieran ocasionar sobre el ambiente y los ecosistemas, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

CAPÍTULO III DE LA RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 97.- Una vez evaluada la solicitud de Licencia Ambiental Integral, la Comisión y en su caso los ayuntamientos, emitirán, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrán:

- I.- Otorgar la Licencia Ambiental Integral en los términos solicitados;
- II.- Otorgar la Licencia Ambiental Integral de manera condicionada a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación y/o

compensación. En este caso la Comisión y los ayuntamientos señalarán los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista; o

III.- Negar la Licencia Ambiental Integral, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones aplicables;

b) El desarrollo de la obra o actividad pudiera generar efectos adversos al ambiente, el equilibrio ecológico, la salud pública o los ecosistemas;

c) La obra o actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se afecte a una de dichas especies;

d) El uso de suelo y las actividades que se llevan a cabo en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto sean incompatibles;

e) Se afecte el interés público o los derechos de terceros;

f) La solicitud no se ajuste a los requerimientos previstos en esta ley y las demás disposiciones que se derivan de la misma; o

g) Exista falsedad en la información proporcionada.

ARTÍCULO 97 BIS.- La Comisión o el Ayuntamiento, según corresponda, podrán modificar términos, autorizaciones, licencias, permisos y condicionantes de la resolución de la Licencia Ambiental Integral a solicitud del particular, siempre y cuando no se afecte el ambiente y el interés público con dicha modificación, versen sobre una situación posterior a la presentación de su solicitud de Licencia Ambiental Integral y que la modificación planteada no implique un incremento en el impacto o riesgo de dicha obra o actividad que deba ser evaluada nuevamente.

Dicha solicitud podrá efectuarse en cualquier momento dentro del periodo de vigencia de la Licencia Ambiental Integral y podrá realizarse en el formato que determine la Comisión debiendo contener la información necesaria para demostrar que la modificación no incrementa el impacto y riesgo autorizado previamente.

ARTÍCULO 98.- La Comisión o el Ayuntamiento respectivo indicarán en la Licencia Ambiental Integral la vigencia de la misma, el nombre o denominación de sus titulares, la obra o actividad autorizada, su ubicación y las condiciones de descarga al ambiente, así como la información ambiental objeto de la evaluación, en la que se considere lo relacionado con los elementos del ambiente.

Cuando no se afecte el ambiente, ni el interés público y se haya dado cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la resolución correspondiente, la Comisión o el Ayuntamiento, a petición del interesado, podrán modificar, revalidar o prorrogar la vigencia de la Licencia otorgada, siempre que ésta no hubiere vencido, previa comprobación de cumplimiento de los términos y condiciones establecidos.

ARTÍCULO 99.- Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Comisión o el Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, señalarán los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista y el plazo para su cumplimiento, y en su caso, las condiciones de descargas de contaminantes a los distintos elementos naturales.

ARTÍCULO 100.- La ejecución de la obra o actividad autorizada deberá sujetarse a lo dispuesto en la Licencia Ambiental Integral. Los titulares de la Licencia serán responsables de los impactos atribuibles a la realización de dichas obras o actividades, por lo que durante la vigencia de la misma deberán efectuar las acciones de mitigación, compensación o restauración que le sean señaladas por las autoridades ambientales.

Serán nulos de pleno derecho los actos que efectúen los titulares de las Licencias Ambientales Integrales en contravención a lo dispuesto por la misma.

ARTÍCULO 101.- Cuando los interesados en obtener una Licencia Ambiental Integral se desistan de ejecutar la obra o actividad respectiva deberán comunicarlo por escrito a la Comisión o al Ayuntamiento antes del otorgamiento de la Licencia correspondiente, o al momento de suspender la realización de la obra o actividad si la Licencia ya se hubiere otorgado, en cuyo caso deberán adoptarse las medidas que determinen las autoridades ambientales, a efecto de evitar alteraciones nocivas al equilibrio ecológico o al ambiente.

ARTÍCULO 102.- Si con anterioridad a que se dicte la resolución se presentan cambios o modificaciones en el proyecto objeto de la solicitud de Licencia Ambiental Integral, el interesado deberá dar aviso de esta situación, por escrito, a la Comisión o, en su caso, al Ayuntamiento correspondiente, para que determinen si procede o no la presentación de una nueva solicitud.

La Comisión o el Ayuntamiento comunicarán al interesado la determinación que corresponda, en un término de cinco días hábiles contados a partir del día en que hubieren recibido el aviso respectivo.

ARTÍCULO 103.- Quienes hubieran obtenido la Licencia Ambiental Integral deberán presentar anualmente ante la Comisión o el Ayuntamiento respectivo, una Cédula de Operación, sin que represente un costo para quien la tramite, siempre y cuando haya cumplido con la Reglamentación Municipal aplicable y ésta se haya presentado antes del vencimiento de la anterior.

La Cédula de Operación se formulará y presentará dentro del período que señalen las autoridades ambientales, conforme a la guía que para el efecto emitan, la que deberá acompañarse de la información y documentación siguientes:

I.- Datos generales del promovente y de la Licencia Ambiental Integral otorgada;

II.- Informe del cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de los impactos y riesgos ambientales que en su caso se hayan producido en el desarrollo y operación del proyecto; así como las descargas de contaminantes a los distintos elementos naturales; y

III.- Posibles cambios o modificaciones de la obra o actividad autorizada en la Licencia Ambiental Integral.

ARTÍCULO 103 BIS.- Para efectos del segundo párrafo del artículo anterior, en caso de posibles cambios o modificaciones de la obra o actividad autorizada en la Licencia Ambiental Integral, los titulares de ésta podrán presentar sólo los apartados que correspondan de la guía que para el efecto emita la autoridad ambiental correspondiente.

La solicitud respectiva será presentada por el titular de la Licencia Ambiental Integral, bajo protesta de decir verdad, y será resuelta por la Comisión o los ayuntamientos, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la misma.

ARTÍCULO 104.- La Comisión o el Ayuntamiento respectivo, por sí mismos o a solicitud de la Procuraduría, podrán suspender o revocar una Licencia Ambiental Integral, en los siguientes supuestos:

I.- Para la suspensión:

a) Si estuviere en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente;

b) En caso de peligro inminente de desequilibrio ecológico o de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública;

c) El desarrollo de la obra o actividad pudiera generar efectos adversos al ambiente, el equilibrio ecológico, la salud pública o los ecosistemas; y

d) La obra o actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se afecte a una de dichas especies; y

II.- Para la revocación:

a) Por el incumplimiento del fin para que el fue otorgada;

b) Por incurrir en alguna de las causales previstas en los incisos a), c), d) y e) de la fracción III del artículo 97 de esta ley; y

c) Por variaciones significativas de las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 105.- La Licencia Ambiental Integral se extingue:

I.- Cuando se haya cumplido su vigencia sin que se solicite prórroga;

II.- Cuando el particular así lo solicite antes del cumplimiento de su vigencia y no se afecte con ello el interés público; y

III.- Por revocación, en los casos previstos por el artículo anterior.

CAPÍTULO IV DE LOS SEGUROS Y LAS GARANTÍAS

ARTÍCULO 106.- Los titulares de una Licencia Ambiental Integral deberán otorgar ante la Comisión o el Ayuntamiento correspondiente los seguros o garantías para el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta, cuando por causa de la obra o actividad autorizada puedan producirse daños graves a los ecosistemas, la salud pública o bienes.

Los promoventes deberán anexar a su solicitud de Licencia Ambiental Integral un estudio técnico valorativo y el monto del posible daño ambiental que pudiera ocasionarse con su obra o actividad. Dicho estudio deberá actualizarse por el titular, en caso de realizar alguna modificación que implique un incremento en el posible daño; además, será obligación de éste la renovación o actualización del monto del seguro o garantía que se le hubiere otorgado.

ARTÍCULO 107.- La Comisión o el Ayuntamiento correspondiente podrán ordenar la suspensión temporal, parcial o total de la obra cuando el titular de la Licencia Ambiental Integral dejare de otorgar el seguro o garantía que se le hubiere requerido, pudiendo continuar con ésta en el momento que dé cumplimiento a dicho requerimiento.

El titular de la Licencia Ambiental Integral podrá otorgar sólo los seguros o garantías correspondientes a la totalidad de la obra o actividad a realizar, o bien a la etapa del proyecto que se encuentre realizando.

ARTÍCULO 108.- La Comisión o el Ayuntamiento correspondiente, a solicitud del titular de la Licencia Ambiental Integral, ordenará la liberación de los seguros o garantías que se hubieren otorgado, cuando éste acredite que se han cumplido con todas las condiciones que motivaron su otorgamiento.

La Comisión o el Ayuntamiento correspondiente verificarán, en un plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de liberación, que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 109.- La Comisión constituirá un Fideicomiso para el manejo de los recursos obtenidos por el cobro de los seguros o la ejecución de las garantías a que se refiere este

Capítulo. Dichos recursos deberán aplicarse a la reparación de los daños ambientales o ecológicos causados por la realización de las obras o actividades de que se trate.

TÍTULO QUINTO **DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

CAPÍTULO I **DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA** **CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA**

SECCIÓN I **DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN** **DE LA ATMÓSFERA**

ARTÍCULO 110.- Para la protección de la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y en las regiones del Estado; y

II.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 111.- En materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el Estado y el Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Preverán y controlarán la contaminación a la atmósfera en los bienes y zonas de sus respectivas jurisdicciones, así como en fuentes fijas que no sean competencia de la Federación;

II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en programas estatales o municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de establecimientos contaminantes;

III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de sus respectivas jurisdicciones el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas respectivas;

IV.- Integrarán un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia;

V.- Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación;

VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico que soliciten de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sistemas de monitoreo de la calidad del aire, y remitirán a dicha dependencia los reportes locales de monitoreo atmosférico para que se integren al Sistema Nacional de Información Ambiental, conforme a los acuerdos de coordinación correspondientes;

VII.- Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones de contaminantes de vehículos automotores, excepto los destinados al transporte público federal, y las medidas de tránsito y, en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación;

VIII.- Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;

IX.- Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en el Estado o el Municipio de que se trate, que convengan con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de acuerdos de coordinación que se celebren;

X.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire; y

XI.- Ejercerán las demás facultades que les confieren esta ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El registro a que se refiere la fracción IV de este artículo se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Comisión o los ayuntamientos.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. Los responsables de las fuentes contaminantes están obligados a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro.

ARTÍCULO 112.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo anterior, se consideran:

I.- Zonas de jurisdicción estatal:

a) Los inmuebles ocupados por las instalaciones de las terminales del transporte público estatal;

b) Las zonas y los parques industriales que no sean competencia de la Federación; y

c) Las que definan con este carácter las leyes del Estado.

II.- Fuentes fijas de jurisdicción estatal:

a) Los establecimientos industriales que por su actividad no sean competencia de la Federación;

b) Los sistemas de tratamiento, incineración y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y

c) Los sistemas de tratamiento de aguas residuales; y

III.- Zonas y fuentes fijas de jurisdicción municipal:

a) Las no reservadas a la Federación o al Estado en la presente ley y en la Ley General.

ARTÍCULO 113.- Queda prohibido emitir contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones se deberán observar las disposiciones de esta ley y de los reglamentos que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas aplicables.

Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar o realicen obras o actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas serán responsables del cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este artículo.

SECCIÓN II

DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADA POR FUENTES FIJAS

ARTÍCULO 114.- Los responsables de las fuentes fijas que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a:

I.- Obtener una licencia de funcionamiento de la fuente de que se trate, tramitándola a través de la Licencia Ambiental Integral a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley;

II.- Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes o, en su caso, a las condiciones de descarga establecidas en la Licencia Ambiental Integral;

III.- Integrar, en el formato que determinen la Comisión o el Ayuntamiento respectivo, un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera y remitirlo a estas autoridades anualmente en la Cédula de Operación a que se refiere el artículo 103 de esta ley;

IV.- Instalar plataformas y puertos de muestreo;

V.- Medir las emisiones de contaminantes a la atmósfera con la periodicidad que se determine en las normas oficiales mexicanas, y en su defecto, la Comisión o el Ayuntamiento que corresponda; registrar los resultados de la medición en el formato que estas autoridades precisen, y remitirles los registros cuando así se los soliciten;

VI.- Llevar a cabo el monitoreo perimetral de las emisiones contaminantes con la periodicidad que determinen la Comisión o, en su caso, el Ayuntamiento, cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o suburbanas o colinde con áreas naturales protegidas, o cuando por sus características de operación o por sus materias primas, productos y subproductos puedan causar grave deterioro a los ecosistemas;

VII.- Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control;

VIII.- Dar aviso anticipado a la Comisión o, en su caso, al Ayuntamiento del inicio de operación de sus procesos y de los paros programados de éstos, y de inmediato, cuando los paros de los procesos sean circunstanciales si éstos pueden provocar contaminación;

IX.- Dar aviso de inmediato a la Comisión o al Ayuntamiento, en el caso de ocurrir alguna falla en el equipo de control, para que determinen lo conducente cuando la falla pudiera provocar contaminación;

X.- Llevar bitácoras del consumo de materias primas e insumos que en su manejo, uso o procesamiento genere algún tipo de emisión a la atmósfera;

XI.- Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en el caso de una contingencia; y

XII.- Las demás que se establezcan en esta ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

ARTÍCULO 115.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas o líquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión por contaminantes y por fuentes de contaminación que se establezcan en las normas oficiales mexicanas o en las condiciones de descarga que se determinen en la Licencia Ambiental Integral.

La determinación de los niveles de emisión de los contaminantes a que se refiere este artículo se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas aplicables y a falta de éstas, con los métodos autorizados por la Comisión o el Ayuntamiento respectivo.

ARTÍCULO 116.- Sólo se permitirá la combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción estatal o municipal, cuando la misma se efectúe con permiso expedido por la Comisión o por el Ayuntamiento respectivo.

Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el interesado deberá presentar a la Comisión o al Ayuntamiento, según corresponda, solicitud por escrito, cuando menos con quince días hábiles de anticipación a la fecha en que se realice el evento, acompañada de la siguiente información y documentación:

I.- Croquis de localización del predio, indicando el lugar preciso en el que se efectuarán las combustiones, así como las construcciones y colindancias más próximas a éste y las condiciones de seguridad que imperan en el mismo;

II.- En su caso, programa de las combustiones a realizar, en el que se precise la fecha y horario en los que éstas tendrán lugar; y

III.- Tipos y cantidades de combustibles que serán utilizados.

La Comisión o el Ayuntamiento correspondiente, no permitirán quemas a cielo abierto cuando se encuentren dentro de los supuestos del artículo 113 de esta ley.

Podrán suspender de manera total o parcial, temporal o definitiva el permiso que hubieren otorgado cuando se presente algún evento extraordinario de contingencia ocasionado por las combustiones, o cuando las condiciones ambientales no permitan una adecuada dispersión de los contaminantes.

Quedan prohibidas las quemas a cielo abierto, cuando se utilicen como combustible residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, salvo autorización expresa de la Comisión o el Ayuntamiento.

Quedan prohibidas las quemas de cualquier tipo y de cualquier material en los centros de transferencia y confinamiento de residuos sólidos municipales y de manejo especial.

SECCIÓN III

DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ARTÍCULO 117.- Las emisiones de contaminantes de los vehículos automotores que circulen en el territorio del Estado no deberán rebasar los límites permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas.

ARTÍCULO 118.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores verificarán éstos con la periodicidad y en los centros de verificación vehicular que para el efecto autorice la Comisión, a efecto de controlar la generación de emisiones contaminantes.

Cuando como resultado de la verificación de emisiones contaminantes se detecte que éstas exceden los límites permisibles, el propietario o poseedor deberá efectuar las reparaciones necesarias al vehículo que las genere, en el plazo que para tal efecto establezcan las autoridades ambientales, a fin de que se cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes.

La omisión de la verificación o el incumplimiento de las medidas que se establezcan para el control de emisiones serán sancionados en los términos previstos en esta ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará en aquellos municipios cuyo parque vehicular sea superior a los cincuenta mil vehículos automotores.

En aquellos municipios que cuente con un parque vehicular inferior al número antes citado podrán aplicar las disposiciones de este artículo.

En todo caso para incentivar el cumplimiento de la presente disposición por parte de los ciudadanos, la Comisión procurará establecer sus programas de verificación vehicular de

manera independiente a la verificación del cumplimiento de otras disposiciones de índole recaudatorio.

ARTÍCULO 119.- En relación con las emisiones de contaminantes de vehículos automotores, excepto los destinados al transporte público federal, corresponderá:

I.- A la Comisión:

a) Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de vehículos automotores que no sean considerados de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con esta ley corresponda a los Municipios;

b) Establecer y operar o, en su caso, autorizar el establecimiento y operación de centros de verificación para los vehículos automotores señalados en el inciso anterior, con arreglo a las normas oficiales mexicanas, así como integrar un registro de los centros de verificación autorizados;

c) Establecer programas de verificación vehicular obligatoria;

d) Determinar, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes aplicables, las tarifas para los servicios de verificación vehicular obligatoria a que se refiere esta sección;

e) Expedir en los centros que opere, constancias respecto de los vehículos que se hubieren sometido a la verificación obligatoria;

f) Supervisar la operación de los centros de verificación vehicular que autorice;

g) Integrar y mantener actualizado un informe de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes en los centros de verificación que opere o autorice;

h) Supervisar la operación de los centros de verificación vehicular obligatoria que autoricen;

i) Integrar y mantener actualizado un informe de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes realizadas en los centros de verificación que operen o autoricen;

j) Limitar y, en su caso, suspender la circulación de vehículos a fin de reducir los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera cuando éstos excedan los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables, o cuando no se cuente con comprobante vigente que acredite haber realizado la verificación vehicular de forma satisfactoria; con la participación de la Procuraduría;

k) Retirar de la circulación a los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que se determinen en las normas oficiales mexicanas, o cuando no se cuente con comprobante vigente que acredite haber realizado la verificación vehicular de forma satisfactoria, y aquellos vehículos automotores que se encuentren sujetos a las medidas señaladas en la fracción anterior, con la participación de la Procuraduría;

l) Aplicar las medidas que establece esta ley y sus reglamentos para prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias ecológicas, cuando se hayan producido los supuestos previstos en las normas oficiales mexicanas; y

m) Las demás que se prevean en esta ley y en los reglamentos respectivos.

I BIS.- A la Procuraduría:

a) Realizar actos de inspección y vigilancia para verificar la debida observancia de las disposiciones de esta Sección y las reglamentarias;

b) Imponer las sanciones administrativas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones mencionadas en la fracción anterior; y

II.- A los Ayuntamientos, dentro de sus circunscripciones territoriales:

a) Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de vehículos automotores que le sean transferidas por el Estado;

b) Se deroga.

c) Se deroga.

d) Se deroga.

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) Se deroga.

h) Se deroga.

i) Se deroga.

j) Se deroga.

k) Se deroga.

l) Se deroga.

m) Las demás que se prevean en esta ley y en los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 120.- Lo previsto en los incisos j), k) y l) de la fracción I y el inciso a) de la fracción II del artículo anterior, no será aplicable a vehículos automotores destinados a:

I.- Servicios médicos y bomberos;

II.- Seguridad pública y tránsito; y

III.- Servicio de transporte de uso privado en los casos de emergencia.

ARTÍCULO 121.- La Comisión convocará públicamente a los interesados en establecer y operar centros de verificación, para que presenten las solicitudes para obtener la autorización para establecer y operar dichos centros.

En las convocatorias que se expidan se precisarán las instalaciones y el equipo necesarios para operar los centros de verificación conforme al programa de que se trate, así como el número y el área de ubicación de los centros a autorizar.

ARTÍCULO 122.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá contener:

I.- El nombre, la denominación o razón social y el domicilio del solicitante;

II.- Los documentos que acrediten la capacidad técnica y económica para realizar adecuadamente la verificación vehicular;

III.- La ubicación y superficie del terreno destinado a realizar el servicio, sin que se provoquen problemas de vialidad;

IV.- Las especificaciones de infraestructura y equipo para realizar la verificación de que se trate; y

V.- La descripción del procedimiento de verificación que sea congruente con los establecidos por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 123.- La Comisión tramitará y resolverá la solicitud presentada en un plazo no mayor de veinte días hábiles posteriores a aquél en que la hubiere recibido, y de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento respectivo de la presente ley.

En la autorización para operar un centro de verificación se establecerá el tiempo de su vigencia, misma que podrá ser prorrogada previa solicitud de los interesados siempre que la autoridad ambiental compruebe el correcto funcionamiento del centro que se trate.

ARTÍCULO 124.- Las autorizaciones para el establecimiento y operación de centros de verificación vehicular se suspenderán cuando los prestadores del servicio dejen de contar con la capacidad o las condiciones técnicas necesarias para su adecuada prestación.

La Comisión establecerá un plazo para subsanar las deficiencias que motivaron la suspensión.

ARTÍCULO 125.- Las autorizaciones para el establecimiento y operación de centros de verificación vehicular se revocarán cuando:

I.- Las verificaciones se realicen sin observar las normas oficiales mexicanas aplicables o los términos de la autorización otorgada;

II.- Se alteren en forma dolosa o negligente los procedimientos de verificación o las tarifas autorizadas para el servicio;

III.- Se omita subsanar, dentro del plazo fijado para el efecto por la autoridad ambiental, las deficiencias que dieron motivo a la suspensión de la autorización; y

IV.- Se hubiere determinado por dos ocasiones la suspensión de la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 126.- La certificación o constatación de los niveles de emisión de contaminantes en los centros de verificación se realizará de acuerdo con las normas oficiales mexicanas aplicables.

SECCIÓN IV DE LA QUEMA AGRÍCOLA

Artículo 126 BIS.- Queda estrictamente prohibida la quema de material vegetal y de crecimiento en terrenos agrícolas, salvo que se hubiese obtenido el permiso de quema controlada expedido por el ayuntamiento correspondiente.

Artículo 126 TER.- Los ayuntamientos, a través de su dependencia dedicada a la ecología, emitirán las licencias a quienes habiendo presentado un plan de quema controlada, cumplan con los requisitos establecidos por los mismos municipios para la mitigación del impacto a los recursos naturales y a propiedades colindantes.

CAPÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

ARTÍCULO 127.- Para la prevención y control de la contaminación del agua de jurisdicción estatal se considerarán los criterios establecidos en la Ley General, mismos que se tomarán en cuenta en:

I.- El establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales o de condiciones particulares de descarga, para evitar riesgos y daños a la salud pública;

II.- La determinación de tarifas de consumo de agua potable y alcantarillado;

III.- El diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales;

IV.- El otorgamiento y confirmación de derechos y permisos provisionales para el uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción estatal;

V.- Los programas estatales o municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico; y

VI.- Los programas de aprovechamiento y protección de los recursos hidráulicos.

ARTÍCULO 128.- Corresponderá al Estado y a los ayuntamientos, por sí o a través de sus organismos operadores o prestadores de servicios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los convenios que en su caso se celebren:

I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;

II.- La vigilancia de las normas oficiales mexicanas en materia de aprovechamiento, reuso y descarga de aguas que no sean de jurisdicción federal;

III.- Requerir, en los casos que proceda, la instalación de sistemas de tratamiento de aguas a quienes generen descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado;

IV.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren; y

V.- Las demás que se establezcan en el reglamento respectivo y en las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 129.- Para evitar la contaminación del agua, los organismos operadores o los prestadores de servicios correspondientes deberán:

I.- Impedir que las descargas de origen municipal se mezclen con otras;

II.- Impedir el vertimiento de residuos en cuerpos y corrientes de agua, y en los sistemas de drenaje y alcantarillado; y

III.- Aplicar las normas oficiales mexicanas en la disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas a su cargo.

ARTÍCULO 130.- Para promover y consolidar el uso racional y eficiente del agua, corresponderá a los organismos operadores o a los prestadores de servicios correspondientes:

I.- Promover el riego de áreas verdes públicas o privadas, con aguas residuales tratadas, siempre que éstas cumplan con la calidad establecida por las normas oficiales mexicanas;

II.- Impulsar la reutilización de las aguas grises en las nuevas edificaciones;

III.- Fomentar, en los usos productivos que lo permitan, la sustitución de agua potable por agua residual tratada;

IV.- Promover el empleo de productos ahorradores de agua;

V.- Promover el establecimiento de tarifas preferenciales para los usuarios que practiquen un uso racional del agua, con el propósito de fomentar la participación de la ciudadanía en estas prácticas;

VI.- Establecer programas para garantizar el rendimiento y eficiencia de las redes de distribución de agua potable;

VII.- Garantizar que el desarrollo de las nuevas redes de distribución se realice con criterios de calidad tanto en los materiales a utilizar, como en su instalación; y

VIII.- Promover la creación de una cultura de cuidado y uso racional del agua en el Estado.

ARTÍCULO 131.- Las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y las condiciones particulares de descarga que en su caso fije la autoridad competente en los términos de la ley de la materia.

Los responsables de las descargas de aguas residuales deberán tratar dichas aguas antes de verterlas en los cuerpos de aguas de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y alcantarillado para ajustar su calidad a la dispuesta en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las condiciones particulares de descarga. Estas descargas deberán registrarse ante el organismo operador o prestador de servicios correspondiente.

Las aguas residuales domésticas quedan exceptuadas de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.

ARTÍCULO 132.- Las aguas residuales provenientes de usos domésticos, comerciales y de servicios públicos o privados, las industriales y las agropecuarias que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población o en cualquier cuerpo de agua de jurisdicción estatal deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:

I.- La contaminación de los cuerpos receptores;

II.- La interferencia en los procesos de depuración de las aguas; y

III.- Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los aprovechamientos de las aguas y de los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.

ARTÍCULO 133.- Los responsables de las descargas de aguas residuales podrán solicitar al organismo operador o al prestador de servicios correspondiente que tomen a su cargo el tratamiento de dichas aguas, previo el pago de las cuotas que se fijen en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 134.- Las autoridades competentes para otorgar asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas de jurisdicción estatal en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, establecerán como condición para su expedición el tratamiento necesario de las aguas residuales que se produzcan o descarguen.

ARTÍCULO 135.- El Estado, con la participación de los ayuntamientos y, en su caso, de los organismos operadores o prestador de servicios correspondientes, podrá realizar un monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas de jurisdicción estatal, para detectar la presencia de contaminantes y determinar las medidas que procedan y, en su caso, promover su ejecución.

Para efectos de lo anterior, el Estado podrá celebrar con las autoridades federales competentes los acuerdos de coordinación que correspondan, a efecto de recibir el apoyo o asistencia técnica que requiera.

CAPÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

ARTÍCULO 136.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I.- Corresponde al Estado, a los ayuntamientos y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo;

II.- Los residuos deben ser controlados en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;

III.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;

IV.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva;

V.- Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación, desertificación o modificación de las características topográficas con efectos ecológicos adversos;

VI.- En las zonas de pendientes pronunciadas en las que se presenten fenómenos de erosión o de degradación del suelo, se deben introducir cultivos y tecnologías que permitan revertir el fenómeno;

VII.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos deben incluir acciones equivalentes de regeneración;

VIII.- La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana, a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar;

IX.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos deberán realizarse las acciones para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en las actividades previstas por los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

X.- Sensibilizar a través de campañas y programas estatales a la población en general y principalmente a industrias, comercios y establecimientos de servicios para que tomen medidas encaminadas a la no utilización de productos plásticos; y

XI.- Exigir que los establecimientos de alimentos y bebidas, tanto fijos como ambulantes, de todo el Estado no promuevan el consumo, ni utilicen popotes de plástico.

ARTÍCULO 137.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se considerarán en:

I.- La ordenación y regulación del desarrollo urbano;

II.- La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios;

III.- La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen;

IV.- Los requisitos para el otorgamiento de apoyos a las actividades agrícolas, para que se promueva la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas; y

V.- Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias minerales; las excavaciones y las acciones que alteren la cubierta y suelos forestales.

ARTÍCULO 138.- Los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I.- La contaminación del suelo;

II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico del suelo;

III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación;
y

IV.- Los riesgos y problemas de salud.

ARTÍCULO 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias, materiales o residuos contaminantes en los suelos, se sujetará a lo que disponga la Ley General, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas respectivas.

ARTÍCULO 140.- Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como consecuencia de ésta, además de las sanciones a que sean sujetos, estarán obligados a reparar el daño causado conforme a las disposiciones legales correspondientes.

ARTÍCULO 141.- Los propietarios o poseedores de predios y los titulares de áreas concesionadas cuyos suelos se encuentren contaminados serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación.

ARTÍCULO 142.- Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 143.- La Comisión promoverá directamente o en coordinación con las dependencias federales y estatales competentes que los productores y agrupaciones agrícolas realicen un uso racional y con apego a las disposiciones aplicables de los plaguicidas y fertilizantes, propiciando el aprovechamiento y conservación del suelo.

ARTÍCULO 143 BIS.- A fin de proteger el medio ambiente en el Estado, las personas físicas o morales que otorguen bolsas de plástico a título gratuito, de manera onerosa o por cualquier acto comercial, para la transportación, carga o traslado de productos vendidos, deberán garantizar:

I.- Que en su composición cuenten al menos con 10% de plástico reciclado. Quedando exentos paquetes, embalajes, bolsas primarias y bolsas utilizadas para alimentos frescos;

II.- Que las bolsas de plástico tengan impreso logotipo o identificación de reciclado considerando el código correspondiente;

III. Que cuando el establecimiento opte por otorgar bolsas elaboradas con material biodegradable, o que contengan aditivos que aceleran su proceso de degradación, deberán contar con un distintivo que especifique el tipo de aditivo integrado en el proceso de producción de la bolsa, así mismo, contar con evidencia de que los residuos resultantes del proceso de degradación de las bolsas de plástico con aditivo degradante no tienen características de toxicidad.

Las especificaciones o características de las evidencias que garanticen el cumplimiento del presente artículo serán establecidas en el reglamento correspondiente de esta Ley.

ARTÍCULO 143 BIS 1.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, implementará un programa estatal de minimización, reuso y reciclaje de residuos plásticos que al menos contendrá:

I.- Campañas de difusión y concientización a los diferentes sectores de la sociedad sobre el manejo apropiado de los residuos plásticos en general, estableciendo que éstos deben ser reciclados o confinados y no dispuestos en el entorno;

II.- Estrategias administrativas y de gestión para el fomento y establecimiento de procesos para selección, clasificación, acopio y transporte de residuos plásticos con objeto de reciclaje, que propicien que el plástico que no se confine, sea valorizado y se recicle; y

III.- Cursos o talleres de educación y capacitación sobre la normatividad ambiental aplicable al manejo integral de residuos, con énfasis en la gestión de nuevas unidades de negocio en materia de reciclaje de plásticos.

ARTÍCULO 143 BIS 2.- Los Ayuntamientos, tendrán facultades para verificar que en los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, no se utilicen bolsas de polietileno u otro material plástico, que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 143 BIS de esta Ley.

Así como también para verificar en fábricas y centros de distribución, que no se vendan, almacenen y distribuyan bolsas de polietileno u otro material plástico, que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 143 BIS de esta Ley.

ARTÍCULO 143 BIS 3.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, deberá crear un Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de bolsas biodegradables en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y morales que fabriquen o comercialicen dichas bolsas, quienes deberán contar, con un certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos, expedida o avalada por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 143 BIS 4.- A las personas físicas o morales que incumplan con lo previsto en el artículo 143 Bis se les aplicará una multa de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización diarias, así como el decomiso de las bolsas.

En caso de reincidencia, se duplicará la multa señalada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 143 BIS 5.- Al que viole lo dispuesto en el artículo 143 BIS 3, se le aplicarán las siguientes sanciones:

I.- Multa de 15 a 30 Unidades de Medida y Actualización diarias, al fabricante o distribuidor que no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de bolsas biodegradables; o

II.- Multa de 50 a 70 Unidades de Medida y Actualización diarias, al fabricante o distribuidor que no cuente con el certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos.

CAPÍTULO IV **DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN** **POR RESIDUOS**

SECCIÓN I **DE LAS ATRIBUCIONES**

ARTÍCULO 144.- En materia de la prevención y control de la contaminación por residuos, corresponde al Estado:

I.- Elaborar los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el de Remediación de Sitios Contaminados con éstos;

II.- Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que puedan estar sujetos a planes de manejo;

III.- Autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

IV.- Establecer el registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a la recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de los residuos de manejo especial;

V.- Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos en el Estado y los municipios, con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados;

VI.- Promover programas municipales de prevención y gestión integral de los residuos de su competencia y de prevención de la contaminación de sitios con tales residuos y su remediación, con la participación activa de las partes interesadas;

VII.- Participar en el establecimiento y operación, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con la Federación y los municipios, de un sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias ambientales derivadas de la gestión de residuos de su competencia;

VIII.- Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes del manejo integral de los residuos de su competencia;

IX.- Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos de manejo especial y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como para la prevención de la contaminación de sitios con estos residuos y su remediación;

X.- Promover la educación y capacitación continuas de personas y grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente en la producción y consumo de bienes;

XI.- Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración de los subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos de su competencia;

XII.- Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental de su competencia;

XIII.- Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación;

XIV.- Autorizar el ingreso a la entidad de residuos de manejo especial y sólidos urbanos para valorización, reúso, reciclaje o disposición final en el territorio estatal;

XIV BIS.- Solicitar y recibir el informe de egreso de los residuos que hayan sido autorizados para ingresar a la entidad, cuando se retiren los mismos;

XV.- Promover ante las autoridades federales competentes el evitar que se importen residuos de manejo especial y sólidos urbanos únicamente para disposición final en el Estado o constituyan un obstáculo o desincentiven la reutilización o reciclaje de los residuos no peligrosos generados en el territorio estatal;

XVI.- Solicitar asistencia técnica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el establecimiento de sistemas de gestión integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios;

XVII.- Coadyuvar en la promoción de la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

XVIII.- Promover, a través de un protocolo que genere la reutilización, reducción y reciclaje, el control de la contaminación por residuos en oficinas públicas de gobierno; y

XIX.- Las demás atribuciones que establezcan esta ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 145.- En materia de la prevención y control de la contaminación por residuos, corresponde a los ayuntamientos:

I.- Formular, con la participación de los sectores social y privado, el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, que deberá ser congruente con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;

II.- Controlar los residuos sólidos urbanos;

III.- Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos;

IV.- Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

V.- Establecer y mantener actualizado, con la participación que le corresponda al Estado, el registro de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

VI.- Coadyuvar, en coordinación con la Federación y el Estado, en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

VII.- Efectuar el cobro por la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como de los residuos de manejo especial, cuando se los soliciten;

VIII.- Emitir los reglamentos y demás disposiciones de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia; y

IX.- Las demás atribuciones que establezcan esta ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 146.- La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de circulación en la entidad, los listados contenidos en las normas oficiales mexicanas respectivas, relativas a los residuos sujetos a los planes de manejo establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y, en su caso, propondrán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que deban agregarse a dichos listados, en los términos de lo dispuesto por el artículo 20 de dicha Ley.

ARTÍCULO 147.- Los programas a que se refieren los artículos 144, fracción I, y 145, fracción I, de esta ley se elaborarán e instrumentarán de conformidad con lo previsto por esta ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Dichos programas deberán contener, al menos:

I.- El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;

II.- La política estatal y municipal en materia de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos, respectivamente;

III.- La definición de objetivos y metas para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos de manejo especial y de los residuos sólidos urbanos, según corresponda, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

IV.- Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; y

V.- Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas, a fin de crear sinergias.

ARTÍCULO 148.- La Comisión y los ayuntamientos, de acuerdo con las disposiciones aplicables, podrán solicitar a las autoridades federales competentes, la asesoría para implementar y mejorar los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, así como para identificar alternativas de reutilización y disposición final de dichos residuos, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y de sus fuentes generadoras.

ARTÍCULO 149.- La Comisión propiciará la celebración de acuerdos de coordinación entre los ayuntamientos para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, a fin de avanzar en el desarrollo de mecanismos de regionalización.

ARTÍCULO 150.- La Comisión y los ayuntamientos promoverán que en la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos se utilicen materiales que permitan reducir la generación de residuos sólidos no peligrosos.

Asimismo, promoverán entre los productores, importadores, intermediarios y, en general, cualquier persona física o moral responsable de introducir en el mercado productos que con su uso se conviertan en residuos, la implementación de medidas necesarias para que los envases de dichos productos favorezcan la prevención en la generación de residuos y faciliten su reutilización o el reciclado o valorización de éstos. Igualmente, promoverán que dichos sujetos

participen en el establecimiento de sistemas organizados de gestión de dichos residuos, por sí o a través de la autoridad, con cargo a los consumidores de los mismos.

SECCIÓN II

DE LOS CRITERIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

ARTÍCULO 151.- En el manejo integral de residuos se considerarán los siguientes criterios:

I.- La gestión de residuos se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora; sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés por sus características naturales;

II.- La generación de residuos, su liberación al ambiente y su transferencia de un medio a otro deben prevenirse y minimizarse, y su manejo integral debe implementarse para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas;

III.- Corresponde a quien genere residuos la asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños que éstos produzcan. Toda persona física o moral que produce, detenta o gestiona un residuo está obligada a asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes;

IV.- La participación de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores y empresas de servicios de manejo de residuos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible;

V.- Los residuos deben valorizarse para su aprovechamiento como insumos en las actividades productivas;

VI.- El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación deben fomentarse para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos;

VII.- La disposición final de residuos se limitará sólo a aquéllos cuya valorización o tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada;

VIII.- La remediación de los sitios contaminados se deberá realizar de manera inmediata para prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente;

IX.- Se fomentará la producción limpia como medio para alcanzar el desarrollo sustentable;

X.- La valorización, la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos se aplicarán bajo condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos; y

XI.- La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente.

ARTÍCULO 152.- Los criterios ecológicos para el manejo integral de residuos se considerarán en:

I.- Los requisitos para los apoyos que el Estado otorgue a las diversas actividades para que promuevan la generación, manejo y disposición final sustentable de los residuos;

II.- El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos en materia ambiental;

III.- La elaboración y autorización de planes de manejo de residuos;

IV.- La operación y administración del sistema de recolección, limpia y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

V.- La prestación de servicios de manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

VI.- Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación de suelos;

VII.- La elaboración y administración de programas estatales o municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico; y

VIII.- La entrada y salida de residuos sólidos urbanos y de manejo especial a y de la Entidad.

SECCIÓN III

DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, Y DE SU MANEJO INTEGRAL

ARTÍCULO 153.- Se requiere autorización de la Comisión, que se tramitará mediante la Licencia Ambiental Integral establecida en el Título Cuarto de esta ley, para:

I.- La utilización de residuos de manejo especial en procesos productivos;

II.- El acopio y almacenamiento de residuos de manejo especial provenientes de terceros;

III.- La incineración de residuos de manejo especial;

IV.- El establecimiento de confinamientos para residuos de manejo especial dentro de las instalaciones en las que éstos se generen;

V.- El establecimiento de sitios de disposición final de residuos de manejo especial;

VI.- El manejo de residuos peligrosos por microgeneradores;

VII.- La prestación de servicios para el manejo de residuos de manejo especial;

VIII.- El co-procesamiento y tratamiento de residuos de manejo especial;

IX.- La transferencia de autorizaciones expedidas por la Comisión;

X.- El ingreso de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial al territorio estatal. Respecto a esta autorización, se deberá informar en su caso de la salida de la entidad de tales residuos o de su lugar de confinamiento;

XI.- En general, la realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de los residuos de manejo especial; y

XII.- Las demás actividades que establezcan la presente ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las normas oficiales mexicanas.

ARTÍCULO 154.- Se requiere autorización o concesión, según corresponda, del Ayuntamiento para:

- I.- La utilización de residuos sólidos urbanos en procesos productivos;
- II.- El acopio y almacenamiento de residuos sólidos urbanos provenientes de terceros;
- III.- El establecimiento de confinamientos para residuos sólidos urbanos, la incineración y el transporte de dichos residuos;
- IV.- El establecimiento de sitios de disposición final para residuos sólidos urbanos;
- V.- La disposición de residuos sólidos urbanos por parte de prestadores de servicios en sitios de disposición final propiedad del Ayuntamiento;
- VI.- La transferencia de autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento;
- VII.- La utilización de tratamientos de residuos sólidos urbanos; y
- VIII.- Las demás actividades que establezcan la presente ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las normas oficiales mexicanas.

ARTÍCULO 155.- Los planes de manejo y el manejo integral de los residuos observarán lo dispuesto en la presente ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los planes de manejo deberán contener la siguiente información básica:

- I.- Objetivos específicos y calendario de implantación del plan de manejo;
- II.- Inventario de sus residuos;
- III.- Definición de la estructura de manejo, jerarquía y definición de responsabilidades;
- IV.- Procedimientos usuales de manejo de residuos y propuesta para mejorar dicho manejo;
- V.- Mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de manejo y sujetos responsables de estas acciones; y
- VI.- Datos de los responsables técnicos de la elaboración del plan de manejo.

ARTÍCULO 156.- Los microgeneradores de residuos peligrosos y los generadores de residuos de manejo especial deberán registrarse ante la Comisión como empresas generadoras de residuos peligrosos y empresas generadoras de residuos de manejo especial, respectivamente, y registrarán, igualmente, los planes de manejo correspondientes. Para tal efecto, deberán formular y ejecutar los planes de manejo de los residuos que se incluyan en los listados contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de esta ley.

ARTÍCULO 156 BIS.- En el Registro de Generadores de Residuos se deberán inscribir los microgeneradores de residuos peligrosos y los generadores de residuos de manejo especial, quienes deberán citar su clave de registro en cualquier trámite ante autoridades estatales o municipales.

El Registro de Generadores de Residuos tendrá la siguiente finalidad:

- I.- Elaborar y mantener actualizado el directorio de empresas generadoras registradas y de las que brindan servicios de manejo de residuos;
- II.- Diseñar las estrategias para involucrar a los generadores registrados en las actividades que la Comisión desarrolle para incentivar su participación en la formulación e instrumentación de políticas, programas, planes de manejo, elaboración de proyectos de

normas técnicas estatales, planeación de la infraestructura de manejo de sus residuos y otras destinadas a dar cumplimiento a la legislación en la materia, y

III.- Conocer y registrar los Sistemas de Manejo Ambiental que los generadores han implementado en el Estado.

ARTÍCULO 157.- Los microgeneradores de residuos peligrosos y los generadores de residuos de manejo especial serán responsables del manejo y disposición final de los residuos que generen. Ambos generadores deberán contratar los servicios de manejo y disposición final de sus residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tratándose de los microgeneradores, o por la Comisión en el caso de los generadores de residuos de manejo especial, a excepción de los que cuenten con autorización para el manejo. Asimismo, podrán transferir dichos residuos a terceros para su utilización como materias primas o insumos dentro de sus procesos, haciéndolo del conocimiento de la Comisión, previamente a su transferencia, la cual se hará mediante un plan de manejo para dichos residuos basado en la minimización de sus riesgos.

Quando se contraten los servicios a que se refiere el párrafo anterior y los residuos sean entregados a las empresas o gestores contratados, la responsabilidad por las operaciones objeto de tales contratos será de dichas empresas o gestores, independientemente de la responsabilidad que tiene el generador como tal.

Las empresas o gestores contratados deberán mantener vigentes las autorizaciones mencionadas en este artículo; en caso contrario serán responsables de los daños que ocasione su manejo.

ARTÍCULO 158.- Las personas interesadas en obtener las autorizaciones de la Comisión a que se refiere el artículo anterior deberán presentar ante ésta una solicitud, mediante la Licencia Ambiental Integral establecida en el Título Cuarto de esta ley.

Dichas autorizaciones se otorgarán para llevar a cabo los servicios para el transporte, acopio, almacenamiento, reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial.

ARTÍCULO 159.- Los generadores de residuos sólidos urbanos estarán obligados a entregarlos a los ayuntamientos para su reciclado, valorización o eliminación, en los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan. Los ayuntamientos adquirirán la propiedad de dichos residuos en el momento en que se haga su entrega.

ARTÍCULO 160.- En los municipios con una población superior a 5,000 habitantes, los ayuntamientos deberán implementar sistemas de recolección y separación de residuos sólidos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización.

En el reglamento municipal correspondiente, se deberán establecer las condiciones para la recolección, traslado, valorización, reuso y disposición final de los residuos sólidos urbanos separados.

SECCIÓN IV

INGRESO Y SALIDA DEL ESTADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

ARTÍCULO 161.- Para ingresar al Estado residuos sólidos urbanos y de manejo especial se deberán observar las siguientes disposiciones:

I.- Sólo se permitirá con fines de valorización, co-procesamiento, reuso o reciclaje, siempre y cuando se cumpla con los criterios ecológicos y las disposiciones normativas aplicables y no se afecte la calidad del medio ambiente;

II.- En ningún caso se autorizará el ingreso de residuos que sean o estén constituidos por compuestos orgánicos persistentes;

III.- No se permitirá el ingreso al territorio del Estado de residuos para valorización, reciclaje, co-procesamiento, reutilización o recuperación cuando los procesos a los que serán sometidos no garanticen un adecuado manejo y control de los impactos que pudieran generar a la salud o el ambiente; y

IV.- La Comisión podrá imponer limitaciones al ingreso a la entidad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial cuando desincentive o constituya un obstáculo para la valorización, co-procesamiento, reutilización o reciclaje de los residuos generados en territorio estatal.

ARTÍCULO 162.- Todos los residuos sólidos urbanos que ingresen o salgan del territorio estatal deberán contar con documentación que certifique su origen, que no son residuos peligrosos y que no están constituidos por compuestos orgánicos persistentes.

ARTÍCULO 163.- La Comisión requerirá la presentación de una póliza de seguro o garantía, por parte del solicitante de la autorización para ingreso al Estado, que asegure que se contará con los recursos económicos suficientes para hacer frente a cualquier contingencia y al pago de daños y perjuicios que se pudieran causar durante el proceso de movilización de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de emitir la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 164.- La Comisión podrá negar o revocar las autorizaciones para ingreso al Estado de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para su tránsito y transporte por el territorio estatal, cuando:

I.- Se compruebe que los residuos ingresados no correspondan a las características declaradas de origen y a los resultados de los certificados de análisis de composición;

II.- Se modifique del uso en el territorio estatal, para el que fue autorizado;

III.- Exista riesgos a la salud y al ambiente derivados del manejo de los residuos ingresados;

IV.- No cumpla con las formalidades legales para el internamiento y tránsito por el territorio estatal; y

V.- Por el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 165.- Las empresas ingresen al Estado residuos sólidos urbanos y de manejo especial serán responsables de los daños que ocasionen a la salud, al ambiente o a los bienes como consecuencia del movimiento o manejo de los mismos entre la fuente generadora y el destinatario final, independientemente de las sanciones y penas a que haya lugar.

ARTÍCULO 166.- Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que ingresen ilegalmente al territorio estatal, deberán ser retornados al lugar de origen en un plazo no mayor a sesenta días. En caso de que el responsable no los regrese, lo realizará la Comisión y los costos en los que se incurra durante el proceso de retorno al origen serán cubiertos por el responsable de la operación que intervino en el ingreso de dichos residuos.

CAPÍTULO V

ACTIVIDADES RIESGOSAS

ARTÍCULO 167.- El Gobernador del Estado, a propuesta de la Comisión y previa opinión de las secretarías de Salud Pública; de Infraestructura y Desarrollo Urbano; de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, y de Economía, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil, determinará y publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los criterios para considerar riesgosa una actividad.

ARTÍCULO 168.- Quienes realicen o pretendan realizar actividades riesgosas deberán contar con la autorización correspondiente de la Comisión, que deberán tramitar mediante la Licencia Ambiental Integral prevista en el Título Cuarto de esta ley. Dichas actividades se llevarán a cabo observando las disposiciones de la presente ley, el reglamento respectivo, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 169.- Quienes realicen actividades riesgosas deberán elaborar y mantener permanentemente actualizados sus programas para la prevención de accidentes que puedan afectar al equilibrio ecológico o al ambiente, los cuales deberán presentarse en la Comisión durante el mes de noviembre de cada año para que ésta, previo análisis de los mismos, apruebe o niegue su aplicación.

En caso de negar la aplicación de los programas a que se refiere este artículo, la Comisión indicará en su resolución las causas de la negativa y otorgará el plazo que considere conveniente para que el responsable de la actividad corrija dichas causas. Si transcurrido dicho plazo éstas no se corrigen, la Comisión podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o total, de la actividad hasta en tanto se cumpla con el requerimiento.

Para efectos de evitar la duplicidad de funciones y facilitar la tramitación a que se refiere este artículo, la Comisión deberá coordinarse con las dependencias y entidades competentes para el análisis y aprobación correspondiente.

ARTÍCULO 170.- En la determinación de los usos del suelo a cargo de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano se especificarán las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios clasificados como riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente.

Para tal fin se considerarán:

I.- Las condiciones topográficas, geológicas, meteorológicas y climatológicas de las zonas, de manera que se facilite la rápida dispersión de contaminantes;

II.- La proximidad a centros de población previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos humanos;

III.- Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;

IV.- La compatibilidad con otras actividades de la zona; y

V.- La infraestructura para la dotación de servicios básicos, así como la existente y la necesaria para la atención de emergencias ecológicas.

CAPÍTULO VI

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y DE LA GENERADA POR RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, ENERGÍA LUMÍNICA Y OLORES

ARTÍCULO 171.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, olores, radiaciones electromagnéticas, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los criterios ecológicos aplicables.

ARTÍCULO 171 Bis.- Los responsables de los establecimientos que generen emisiones de ruido, deberán medirlas conforme a los criterios técnicos y la periodicidad establecida en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

ARTÍCULO 172.- La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas

competencias, requerirán a los responsables de los establecimientos industriales, comerciales, de servicios o espectáculos públicos la adopción de medidas que impidan exceder los límites máximos permisibles de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, olores perjudiciales y de contaminación visual. Para tal efecto, la Procuraduría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán que dichos responsables cumplan con las normas oficiales mexicanas correspondientes y, en su caso, aplicarán las sanciones que procedan conforme a esta ley.

Asimismo, en la construcción de obras e instalaciones o en la realización de actividades que generen ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores, los responsables de las mismas deberán llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes.

ARTÍCULO 173.- Los ayuntamientos regularán lo conducente en materia de construcciones, actividades y anuncios publicitarios, a fin de evitar la contaminación visual en los centros de población y crear una imagen agradable de los mismos.

CAPÍTULO VII

REGULACIÓN DE LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MINERALES O SUSTANCIAS NO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO 174.- La exploración, explotación y el aprovechamiento de los recursos no reservados a la Federación se llevarán a cabo de manera que se eviten daños al equilibrio ecológico y al ambiente de las localidades en el Estado.

ARTÍCULO 175.- La exploración, explotación y aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, requerirá permiso de la Comisión, que se tramitará mediante la Licencia Ambiental Integral a que se refiere el Título Cuarto de esta ley.

ARTÍCULO 175 Bis.- Los responsables de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que comercialicen, utilicen o manejen minerales o sustancias no reservadas a la Federación, deberán adquirirlas de empresas o personas que cuenten con el permiso de la Comisión a que se refiere el artículo 175 de esta ley.

ARTÍCULO 176.- Las personas físicas o morales que realicen las actividades a que se refiere este Capítulo estarán obligadas a:

I.- Controlar la emisión o el desprendimiento de polvos, humos o gases que puedan afectar el equilibrio ecológico, así como de sus residuos y evitar su propagación fuera de los terrenos en los que lleven a cabo las actividades;

II.- Implementar un programa de restauración del sitio;

III.- Restaurar la cubierta vegetal necesaria para evitar cualquier proceso de erosión o alteración de los cuerpos de agua;

IV.- Aplicar las medidas necesarias para conservar la capacidad de infiltración de aguas al subsuelo;

V.- Evitar las alteraciones en el ambiente ocasionadas con la realización de las obras de acceso al sitio y extracción de los materiales;

VI.- Sujetarse a las demás disposiciones que determine la Comisión para evitar los impactos al ambiente; y

VII.- Pagar los derechos correspondientes por explotación y aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación.

ARTÍCULO 177.- El permiso para la realización de las actividades a que se refiere este Capítulo en zonas urbanas o en áreas cercanas a centros de población podrá negarse o suspenderse cuando a juicio de la Comisión se ponga en serio peligro el equilibrio ecológico o al ambiente de la localidad, así como la integridad de las personas y los bienes.

ARTÍCULO 178.- Corresponde a la Procuraduría vigilar que los responsables de la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales o sustancias a que se refiere este Capítulo, cumplan con las disposiciones de esta ley, el reglamento respectivo y las demás aplicables en la materia.

CAPÍTULO VIII

DE LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 179.- Para la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, se considerarán los siguientes criterios:

I.- La existencia y bienestar del hombre no sólo depende de los sistemas que éste ha creado, sino en gran parte de los ecosistemas naturales, los que, entre otras características, regulan el clima, retienen el agua y el suelo, depuran la atmósfera y sirven de esparcimiento y son objeto de conocimiento científico;

II.- La preservación del equilibrio ecológico es condición imprescindible para que tenga lugar el desarrollo sostenido en la entidad; y

III.- Es necesaria la participación de todos los sectores de la población en las tareas de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 180.- Para llevar a cabo las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los servicios públicos a cargo del Estado o de los ayuntamientos, o bien en concurso entre ambos órdenes de gobierno, se deberán observar los principios, políticas y criterios ecológicos aplicables y las disposiciones previstas por esta ley. Los concesionarios que tengan a su cargo la prestación de algunos de los servicios públicos deberán observar las disposiciones de la presente ley, de los reglamentos y de las normas oficiales mexicanas.

CAPÍTULO IX

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS ECOLÓGICAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

ARTÍCULO 181.- La prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales corresponden al Estado, por conducto de la Comisión, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos rebasen el territorio de dos o más municipios, sin perjuicio de la participación de éstos.

ARTÍCULO 182.- La prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales serán competencia de los ayuntamientos cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o los daños al ambiente no rebasen el territorio del Municipio respectivo, o cuando no se haga necesaria la acción exclusiva del Estado o de la Federación. En el último de los casos, los municipios solicitarán la intervención de la Federación debiendo dar aviso al Estado.

ARTÍCULO 183.- Corresponderá a la Comisión proponer al Titular del Ejecutivo Estatal la adopción de las medidas necesarias para la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales. Igualmente, le corresponderá la aplicación, en el ámbito de su competencia, de dichas medidas y su coordinación, cuando deban intervenir dos o más dependencias estatales para la atención de las emergencias y contingencias señaladas.

TÍTULO SEXTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE ECOLOGÍA

ARTÍCULO 184.- Se establece el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable como un órgano permanente de coordinación institucional y de concertación social entre las dependencias y entidades estatales y los ayuntamientos, y los representantes de los sectores social y privado, así como la sociedad en general.

Al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable le corresponde:

- I.- Proponer prioridades, programas y acciones ecológicas y de protección al ambiente;
- II.- Impulsar la participación de los sectores público, social y privado en los programas y acciones que impulsen las autoridades;
- III.- Promover la incorporación de la variable ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno, sectores económicos y sociedad;
- IV.- Evaluar periódicamente los resultados de las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de protección del medio ambiente y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir de los informes que proporcionen las autoridades competentes;
- V.- Elaborar recomendaciones para mejorar las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y
- VI.- Promover la integración de los consejos municipales de ecología en los municipios del Estado.

ARTÍCULO 185.- El Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable se integrará por:

- I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II.- Un Secretario Técnico, que será el Director General de la Comisión;
- III.- Los titulares de las siguientes dependencias:
 - a) Secretaría de Salud Pública;
 - b) Secretaría de Economía;
 - c) Secretaría de Educación y Cultura;
 - d) Secretaría de Desarrollo Social;
 - e) Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y
 - f) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura;
- III BIS.- El Procurador Ambiental de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora;
- IV.- El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil;

V.- El titular del Comité Estatal de Áreas Naturales Protegidas establecido en el artículo 51 de esta ley;

VI.- Cinco presidentes municipales representativos de las regiones geográficas de la entidad, por designación del Presidente del Consejo;

VII.- Un representante de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado; y

VIII.- Diez representantes de grupos y organismos de los sectores social y privado y de instituciones educativas y de servicios en el Estado directamente relacionados con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, a invitación del Presidente del Consejo.

Asimismo, el Presidente podrá invitar a participar en las reuniones del Consejo a representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el Estado, así como de los ayuntamientos, cuando se traten asuntos que incidan en sus ámbitos de competencias o territorial.

Los integrantes del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, teniendo sus cargos el carácter de honoríficos.

El funcionamiento del Consejo se especificará en el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 186.- En cada Municipio se constituirá un Consejo Municipal de Ecología, que se integrarán y funcionarán en los términos que establezca el reglamento respectivo.

CAPÍTULO II

DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 187.- La Comisión, con la participación de los ayuntamientos, constituirá un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del Estado.

El Sistema se integrará con la información siguiente:

I.- Los inventarios de los recursos naturales existentes en el Estado;

II.- Los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo;

III.- El registro de emisiones y transferencia de contaminantes;

IV.- El ordenamiento ecológico estatal y municipal; y

V.- La información correspondiente a las declaraciones, registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el Estado.

La Comisión reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas y de trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, que se realicen en el Estado.

El Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas a que se refiere el artículo 67 de esta ley formará parte del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

ARTÍCULO 188.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, elaborará y publicará, cada tres años, un informe detallado de la situación general existente en el Estado en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Asimismo, la Comisión editará una Gaceta en la que se publicarán las disposiciones jurídicas, normas oficiales mexicanas, criterios ecológicos, declaratorias, decretos, acuerdos y

programas, así como información relacionada con las áreas naturales protegidas, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la que sea de interés general en materia ambiental.

ARTÍCULO 189.- Las personas a quienes la Comisión entregue información ambiental del Sistema serán responsables de su adecuada utilización y deberán responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.

CAPÍTULO III

DEL FONDO AMBIENTAL ESTATAL

ARTÍCULO 190.- La Comisión creará el Fondo Ambiental Estatal a través de un Fideicomiso, cuyos recursos se destinarán a:

I.- La realización de acciones y medidas de protección, preservación, inspección, vigilancia y restauración del medio ambiente;

II.- El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas;

III.- El desarrollo de programas de planeación ecológica, educación e investigación en materia ambiental, así como para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente;

IV.- La promoción de la educación, investigación y cultura ambiental en el Estado; y

V.- El desarrollo e implementación de acciones, proyectos y política de mitigación y adaptación al cambio climático; y

VI.- Las demás que señalen las disposiciones ambientales.

ARTÍCULO 190 BIS.- El Fondo Ambiental Estatal contará con un órgano de gobierno mixto integrado por la Administración Pública Estatal, representantes provenientes de los sectores académico, empresarial, grupos vulnerables y sociedad civil organizada, que deberán comprobar que su objeto y experiencia se relaciona con la protección al medio ambiente y el cambio climático.

ARTÍCULO 191.- Los recursos del Fondo se integrarán con:

I.- Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatal y municipal;

II.- Los ingresos que obtenga la Procuraduría por concepto de multas por infracciones a lo dispuesto por la presente Ley y las demás disposiciones aplicables;

III.- Las indemnizaciones que como consecuencia del ejercicio de la acción por daños al ambiente decreten las autoridades jurisdiccionales en las sentencias respectivas;

IV.- Los ingresos que se perciban por concepto del pago de derechos por el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias y demás actos similares expedidos por la Comisión;

V.- Las herencias, legados y donaciones que reciba de personas físicas o morales nacionales e internacionales;

VI.- Los recursos resultantes de los instrumentos económicos que se creen en el marco de la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora y la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética en el Estado de Sonora;

VII.- Los demás recursos que obtenga por cualquier otro título o concepto.

ARTÍCULO 192.- La Comisión, en coordinación con la Procuraduría, será responsable del manejo de los recursos del Fondo Ambiental Estatal, cuyo funcionamiento se realizará conforme a los lineamientos que se establezcan en el reglamento que para el efecto expida el Gobernador del Estado.

TÍTULO SÉPTIMO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA

CAPÍTULO ÚNICO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA

ARTÍCULO 193.- El Ejecutivo del Estado, la Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos expedirán en el ámbito de sus respectivas competencias, los reglamentos, decretos, acuerdos, las circulares y las demás disposiciones de observancia general que resulten necesarias para proveer, en la esfera administrativa, la observancia de este ordenamiento, mismos que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La presente ley constituye la base normativa para la expedición por parte de los ayuntamientos, de las disposiciones jurídicas señaladas en este artículo, las cuales serán de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

TÍTULO OCTAVO DE LA NOTIFICACIÓN, DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 194.- Las disposiciones de este Título se aplicarán en los actos de inspección y vigilancia, imposición y ejecución de medidas de control y de seguridad, determinación de infracciones administrativas y sus sanciones, así como en los procedimientos administrativos y recursos administrativos regulados por esta Ley. También se aplicarán en los actos administrativos que en el ejercicio de sus funciones realicen la Comisión y los ayuntamientos.

En todo lo no previsto en este ordenamiento se aplicará supletoriamente, en este orden, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y, en lo que éstas no prevean, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 194-A.- Las promociones deberán hacerse por escrito, en las que se precisará el nombre; la denominación o razón social de quien o quienes promuevan o, en su caso, de su representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones e inclusive las personales, dentro de la ciudad donde se encuentren las oficinas de la autoridad competente, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas; la petición que se formula; los hechos o razones que dan motivo a la petición; el órgano administrativo a que se dirigen, y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos por esta ley y los ordenamientos que de ella se deriven.

ARTÍCULO 194-B.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí, o por medio de un representante o apoderado legal.

La representación de las personas físicas o morales, públicas o privadas, ante la autoridad administrativa para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos y desistirse y renunciar a derechos deberá acreditarse mediante instrumento público. Tratándose de personas físicas su representación podrá acreditarse con instrumento público o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas sus firmas y la del otorgante ante las propias autoridades o ante fedatario público, o bien por declaración en comparecencia personal del interesado.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal, mediante escrito firmado, podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinentes para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fuesen necesarias para la tramitación del procedimiento, incluyendo la interposición del recurso de revisión.

ARTÍCULO 194-C.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles. No se considerarán días hábiles los sábados, los domingos, y los días festivos, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores por mandato oficial, los que se harán del conocimiento del público mediante acuerdo del titular de la autoridad respectiva, que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundado y motivado por la autoridad competente.

La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto.

ARTÍCULO 194-D.- En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

ARTÍCULO 194-E.- Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta Ley, se realizarán:

I.- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos pueda efectuarse en las oficinas de las unidades administrativas competentes de las autoridades administrativas competentes, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas.

En este último caso se asentará la razón correspondiente;

II.- Por estrados, colocados en un lugar visible de las unidades administrativas competentes, por un término no mayor de diez días hábiles, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia o verificación a las que se refiere el presente Título, o cuando no hubiera señalado domicilio en la población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora, específicamente tratándose de las resoluciones administrativas con carácter definitivas;

III.- Por edicto publicado en el medio impreso de mayor circulación en el Estado y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso, la persona a quien deba notificarse se encuentre desaparecida, o no se le haya localizado en el domicilio oficial o en el señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones,

hasta en dos ocasiones, o se encuentre en el extranjero, sin haber dejado representante legal autorizado para tales efectos;

IV.- Por instructivo, solamente en el caso señalado en el artículo 194-F de la presente Ley.

Los actos distintos a los señalados en la fracción I de este artículo podrán notificarse por escrito, vía correo ordinario, mensajería, telegrama o telefax, medios de comunicación electrónica o similares, previa solicitud por escrito del interesado, o en las oficinas de las unidades administrativas de las autoridades administrativas competentes si se presentan ante ellas las personas facultadas para ello, dentro del término de cinco días hábiles siguientes contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse, término que se deberá señalar al momento de presentar la solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad ordenadora lo haga por estrados que deberán ubicarse, por parte de la Procuraduría o los ayuntamientos, en lugar visible de sus oficinas administrativas, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse.

Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos, no ocurren a las oficinas de las unidades administrativas de las autoridades administrativas competentes, a notificarse dentro del término señalado en el párrafo anterior, las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de la fijación en estrados.

De toda notificación por estrados se agregará al expediente un tanto igual de aquel, asentándose la razón correspondiente.

ARTÍCULO 194-F.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el interesado o en el último domicilio que éste haya señalado ante la autoridad competente en el procedimiento, debiendo cerciorarse el notificador que se trata del domicilio señalado, y deberá entregar el original del acto que se notifique y copia de la constancia de notificación respectiva, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado y nadie respondiere al llamado del notificador para atender la diligencia, el citatorio se dejará en un lugar visible del mismo, o con el vecino más inmediato, razonando en todo momento la cedula de notificación y el acta levantada al respecto.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, o con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

La notificación personal también se podrá realizar al interesado cuando acuda a la oficina administrativa competente de las autoridades administrativas competentes, según corresponda.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito debiendo permanecer éste publicado por lo menos cinco días en la página electrónica de las autoridades administrativas competentes respectivo.

ARTÍCULO 194-G.- Las notificaciones por estrados se publicarán, además de lo establecido por la fracción II del artículo 194-E, en la página electrónica de las autoridades administrativas competentes, según corresponda.

ARTÍCULO 194-H.- Las notificaciones por edictos se efectuarán mediante publicación que contendrán un resumen de los actos por notificar. Dicha publicación deberá efectuarse por un día en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en el Estado.

ARTÍCULO 194-I.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. Las notificaciones hechas por correo certificado surtirán sus efectos a partir de que se presente el sello del correo en donde conste el envío. Tratándose de notificaciones hechas por edictos, se tendrá como fecha de notificación el día hábil siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial y en el periódico respectivo. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fijación del mismo.

ARTÍCULO 194-J.-Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique. Las notificaciones personales deberán hacerse con el texto íntegro de la resolución o acto que se notifique, y las notificaciones por estrados, edictos y por instructivo deben contener un extracto de los mismos. En todo caso contendrán el fundamento legal en que se apoyen con la indicación de si la resolución o el acto son o no definitivos en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que proceda, el órgano ante el que deba presentarse y el plazo para su interposición.

ARTÍCULO 194-K.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de la fecha en que el interesado o su representante legal hagan la manifestación expresa de conocer su contenido.

CAPÍTULO I BIS

DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 194-L.- La Procuraduría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables; pudiendo ambas instancias celebrar acuerdos de coordinación para tales efectos.

ARTÍCULO 194-M.- La Procuraduría y los ayuntamientos podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, entendiéndose por éstas las comprendidas de las 8:00 a las 18:00 horas, y las segundas en cualquier tiempo.

Dichas diligencias iniciarán en horas hábiles y podrán concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

ARTÍCULO 194-N.- Los actos de inspección podrán iniciarse por cualquiera de las siguientes formas: de oficio; por una denuncia pública; por el programa anual de inspecciones de la Procuraduría o, en su caso, de los ayuntamientos; por información turnada por otras dependencias o unidades administrativas de la misma Procuraduría o de los ayuntamientos; por actividades de vigilancia del personal adscrito para tal efecto, o a petición de la parte interesada. La Procuraduría y los ayuntamientos no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en esta ley.

ARTÍCULO 194-O.- El personal autorizado, al practicar las visitas de inspección, deberá contar con credencial vigente expedida por autoridad competente que lo acredite legalmente para practicar la inspección, así como con la orden escrita debidamente fundada y motivada para realizar la visita, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.

ARTÍCULO 194-P.- El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole para tal efecto credencial vigente con fotografía expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia, y le mostrará la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.

ARTÍCULO 194-Q.- En toda visita de inspección se levantará acta administrativa, en la que se asentarán, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, haciéndose constar por lo menos:

I.- Nombre, denominación o razón social del inspeccionado;

II.- Hora, día, mes y año en el que se inició y concluyó la diligencia;

III.- Calle, número, colonia, población o ubicación geográfica, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio y código postal correspondiente al domicilio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección;

IV.- Número y fecha de la orden que motivó la inspección;

V.- Nombre, cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia;

VI.- Nombre, domicilio e identificación de las personas que fungieron como testigos;

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quienes la hubiesen llevado a cabo.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia, para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga o formule observaciones en relación con los hechos asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se hubiese concluido la diligencia. Asimismo, se requerirá para que en dicho plazo de cinco días hábiles señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad donde se encuentren las oficinas de la Procuraduría o los Ayuntamientos correspondientes.

A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia con firma autógrafa del acta al interesado.

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

ARTÍCULO 194-R.- Las personas físicas o morales sujetas a inspección estarán obligadas a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares a inspeccionar, en los términos previstos en la orden escrita a que se refiere el artículo 194-O de esta ley; así como a proporcionar toda clase de información que se les solicite y conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en el caso de requerimiento judicial.

ARTÍCULO 194-S.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia o cuando sea necesario por seguridad del personal de inspección, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 194-T.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, ésta informará al interesado las irregularidades detectadas al momento de llevarse a cabo la visita de inspección, mediante notificación personal, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de día en que hubiera concluido el plazo de cinco días dispuesto en el último párrafo del artículo 194-Q; lo anterior para que en un término de diez días hábiles el interesado exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Procuraduría o los ayuntamientos.

Asimismo, en la misma notificación se requerirá al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y de las demás disposiciones aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento y señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones para que, en un plazo de tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos.

Para efectos de la caducidad prevista en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, el procedimiento administrativo inicia formalmente a partir de la notificación del acuerdo de irregularidades referido en el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 194-U.- En el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades y las que no tengan relación con el fondo del asunto. La autoridad competente podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en Las leyes respectivas.

Las pruebas serán desahogadas conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 194-V.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Procuraduría o el Ayuntamiento correspondiente procederá a dictar por escrito la resolución administrativa que en derecho corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado conforme lo establecido en el artículo 194-F.

ARTÍCULO 194-W.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o, en su caso, adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas y sus impactos al ambiente, estableciendo el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá acreditar, por escrito y en forma detallada ante la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer, además de la sanción o sanciones que procedan conforme a esta ley, una multa adicional que no exceda de los límites máximos señalados en el presente ordenamiento.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 195.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Comisión, la Procuraduría en ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia, o los ayuntamientos, fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen materiales o sustancias contaminantes o de las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el proemio de este artículo, así como, por el incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en la Licencia Ambiental Integral y demás actos que de ésta se deriven;

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, así como de recursos naturales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos en el caso de los microgeneradores, de manejo especial o residuos sólidos urbanos generen los efectos previstos en el proemio de este artículo.

Asimismo, la Procuraduría o los ayuntamientos, según corresponda, podrán promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Cuando la Procuraduría o los ayuntamientos, según corresponda, ordenen alguna de las medidas de seguridad previstas en esta ley, deberán indicar al interesado las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas estas se ordene el retiro de las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en derecho correspondan.

Los inspectores estatales o municipales también tendrán facultades para determinar e imponer las medidas de seguridad previstas en este artículo.

CAPÍTULO III

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 196.- Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría, en asuntos de competencia del Estado y sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley otorga expresamente a la Comisión, y por los ayuntamientos, en el ámbito de competencia de éstos, con una o más de las siguientes sanciones:

I.- Amonestación con apercibimiento;

II.- Multa por el equivalente de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización establecidas para un día, de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), del año en que se impone;

III.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total:

a) Cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente;

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad; o

d) Se trate de la desobediencia a una amonestación pública impuesta por la Procuraduría y los Ayuntamientos;

IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

V.- La suspensión, revocación o cancelación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, cuando:

a) El infractor no diere cumplimiento en tiempo y forma requeridos por la autoridad a las actividades, términos o condiciones señalados en dichas autorizaciones;

b) Exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico;

c) A causa de la realización de la obra o actividad se ponga en peligro la salud humana o los ecosistemas; y

d) La realización de la obra o actividad cause daños a la sociedad o a los bienes materiales públicos o privados.

VI.- Las demás previstas en esta ley.

Si el infractor, una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, no la o las hubiere subsanado, la autoridad podrá imponer multa por cada día que trascurra sin obedecer el mandato, sin que el total de estas exceda el monto máximo permitido conforme a la fracción II de este artículo.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, además del tipo de clausura que determine la autoridad.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada durante el procedimiento seguido en su contra.

Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Procuraduría o los ayuntamientos, en su caso, solicitarán a la autoridad que los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación del permiso, licencia, registro y en general de toda autorización emitida para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales cuya operación o aprovechamiento haya dado lugar a la infracción.

Aquellos establecimientos de consumo de alimentos y bebidas, tanto fijos como ambulantes, que promuevan el uso de popotes de plástico, serán sancionados con lo dispuesto en la fracción II de este artículo.

ARTÍCULO 197.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, se tomará en cuenta:

I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los impactos que se hubieren producidos o puedan producirse en el ambiente, recursos naturales o la biodiversidad, salud pública, la generación de desequilibrios ecológicos, y, en su

caso, los niveles en que se hubieren rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable.

II.- Las condiciones económicas del infractor;

III.- La reincidencia, si la hubiere;

IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y

V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Procuraduría o los ayuntamientos impongan una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

Asimismo, en los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las irregularidades detectadas en los plazos ordenados por la Procuraduría o los ayuntamientos, podrá solicitar a la autoridad que considere el cumplimiento de las medidas como atenuante, o bien, en el caso de existir resolución, la modificación o revocación de la sanción impuesta. La solicitud la podrá hacer a más tardar en un plazo de quince días contados a partir del vencimiento del último plazo concedido para la realización de las medidas correspondientes, siempre y cuando el infractor no sea reincidente y no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 195 de esta ley.

La autoridad administrativa, en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud de modificación o revocación de la sanción, deberá proveer sobre su admisión, prevención o desechamiento, y la suspensión del acto impugnado, en su caso, lo cual deberá notificársele al recurrente personalmente.

El escrito de solicitud de modificación o revocación deberá presentarse ante la autoridad que impuso la sanción y será resuelto por el superior jerárquico de la misma dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la admisión del mismo. En este caso procederá la suspensión de la ejecución de la sanción, que sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución.

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes al monto de ésta en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre que se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 195 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.

ARTÍCULO 198.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello las disposiciones establecidas en el Capítulo I Bis del Título Octavo de esta ley, relativo al procedimiento de inspección y vigilancia.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Procuraduría o, en su caso, el Ayuntamiento deberán indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

ARTÍCULO 199.- Los ingresos que obtenga la Procuraduría por concepto de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, se integrarán al Fondo Ambiental Estatal a que se refiere el artículo 190 de esta ley.

ARTÍCULO 200.- Cuando las autoridades competentes impongan como sanción una multa, ésta tendrá el carácter de crédito fiscal y se hará efectiva por conducto de la Secretaría de

Hacienda del Estado o de las tesorerías municipales, en su caso, a través del procedimiento administrativo de ejecución.

CAPÍTULO IV **DEL RECURSO DE REVISIÓN**

ARTÍCULO 201.- Contra los actos emitidos por la Comisión, la Procuraduría o los ayuntamientos en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven, los interesados podrán a su elección, interponer el recurso de inconformidad, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 202.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto deberán interponer el recurso administrativo de inconformidad, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 203.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en las normas aplicables. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso de inconformidad, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 204.- En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formularán ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.

La Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, según corresponda, proporcionarán, en las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten las autoridades competentes, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.

La Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, según corresponda, serán coadyuvantes de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legales correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal.

CAPÍTULO V **DE LA DENUNCIA POPULAR**

ARTÍCULO 205.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría o los ayuntamientos, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente ley, la Ley General y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Si la denuncia presentada resulta del orden federal, deberá ser remitida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la denuncia, haciendo del conocimiento del denunciante esta situación.

ARTÍCULO 206.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I.- El nombre o razón social, domicilio y teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II.- Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante; y

IV.- La pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, o aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Si el denunciante solicita a la Procuraduría o a los ayuntamientos guardar secreto de su identidad por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia.

Cuando se reciban dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación de éstas en un solo expediente, y se les notificará a los denunciantes el acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 207.- La Procuraduría o los ayuntamientos, una vez recibida la denuncia, procederán por los medios que resulten conducentes a identificar al denunciante, y en su caso, harán saber la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convengan, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la notificación respectiva.

La Procuraduría o el Ayuntamiento efectuarán las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, y para la evaluación correspondiente.

Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental ni afecte cuestiones de orden público e interés social las autoridades podrán sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar a las partes involucradas.

Asimismo, en los casos previstos en esta ley, las autoridades referidas podrán iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas de esta ley.

ARTÍCULO 208.- El denunciante podrá coadyuvar con las autoridades aportándoles las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. Las autoridades deberán manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver sobre la denuncia.

ARTÍCULO 209.- La Procuraduría o el Ayuntamiento, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, dentro de los veinte días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.

ARTÍCULO 210.- Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido abiertos podrán ser concluidos por las siguientes causas:

- I.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente;
- II.- Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;
- III.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; y
- IV.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección.

ARTÍCULO 211.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que la autoridad tenga conocimiento de los efectos adversos que sobre la salud pública o el ambiente produzcan el acto, hecho u omisión correspondiente.

CAPITULO VI **DE LAS OPCIONES DE PAGO**

ARTÍCULO 212.- La autoridad sancionadora correspondiente, a solicitud del infractor, podrá otorgarle la opción de pagar la multa impuesta o, atendiendo lo dispuesto por el último párrafo del artículo 197 de esta ley, realizar inversiones equivalentes a ésta en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración al ambiente y los recursos naturales. La solicitud de conmutación deberá realizarse en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución en la que se impuso la multa.

La autoridad que haya emitido la resolución, acordará la presentación de la solicitud y la turnará al titular de la Procuraduría o a la instancia que corresponda de los Ayuntamientos, para que resuelva en un plazo no mayor de diez días hábiles.

ARTÍCULO 213.- Los infractores interesados deberán presentar su solicitud por escrito y anexar un proyecto de inversión que contenga la propuesta de las inversiones a realizar, desarrollando al menos los siguientes puntos:

I.- Para inversiones equivalentes a la multa en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales:

a).- Explicación detallada de todas y cada una de las actividades que se requieren para llevar a cabo el proyecto;

b).- Indicar el monto total que se pretende invertir, mismo que deberá ser igual o mayor al de la multa impuesta, desglosando los costos unitarios por concepto de material, equipo y mano de obra requeridos para su ejecución;

c).- El lugar, sitio o establecimiento donde se pretende ejecutar o instalar el equipo, pudiendo ser diferente a aquél en donde se originó la infracción, en cuyo caso la Procuraduría o los Ayuntamientos lo aprobarán;

d).- Programa calendarizado de las acciones a realizar en el proyecto; y

e).- La descripción de los beneficios ambientales que se generarían con motivo de la implementación del proyecto, estableciendo indicadores cuantificables para dichos beneficios;

II.- Para trabajos o inversiones equivalentes a la multa en materia de conservación, protección o restauración de los recursos forestales (forestaciones y reforestaciones) considerando los beneficios generados para compensar la imposición de la multa:

a).- Ubicación exacta, características bio-climáticas del lugar donde se pretende realizar la plantación tales como: clima, grado de pendiente del terreno, tipo y profundidad del suelo, erosión, pedregosidad, altitud y tipo de vegetación (árboles, arbustos y herbáceas), teniendo prioridad, el lugar que generó la infracción para su plantación;

b).- Especie o especies idóneas para llevar a cabo la plantación de las mismas, especificándolas en el proyecto;

c).- Técnica o método a utilizar para la preparación del terreno y su mantenimiento;

d).- Forma o diseño de la plantación;

e).- Enumeración de las actividades de mantenimiento y protección de la plantación;

f).- Gastos a realizar, desglosándolos detalladamente y especificando los materiales y la mano de obra requerida para el establecimiento, mantenimiento y protección de la plantación, así como el precio unitario de cada individuo a plantar;

g).- Calendario de todas y cada una de las actividades que comprenda el proyecto a ejecutar; y

h).- La descripción de los beneficios ambientales que se generarían con motivo de la implementación del proyecto, estableciendo indicadores cuantificables para dichos beneficios;

Asimismo, el infractor solicitante deberá garantizar sus obligaciones ante la autoridad recaudadora competente, mediante fianza a favor de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, anexando la constancia correspondiente en su escrito de solicitud.

ARTÍCULO 214.- El titular de la Procuraduría o el del área competente del Ayuntamiento respectivo podrán negar la conmutación de la multa por la inversión, en los siguientes supuestos:

I.- Por encontrarse en los supuestos del artículo 195 de esta Ley, es decir:

a).- Riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos naturales; casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; y

b).- Riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas;

II.- Si el proyecto de inversión propuesto tuviera relación con las obligaciones a las que se encuentra sujeto el solicitante con motivo de la actividad económica o proceso productivo que realiza;

III.- En caso de que el proyecto de inversión propuesto esté relacionado con las irregularidades por las que fue sancionado el solicitante;

IV.- Cuando las medidas de urgente aplicación o medidas correctivas ordenadas durante el procedimiento administrativo, estén vinculadas con el proyecto de inversión propuesto.

V.- Porque el monto de la inversión no sea equivalente al monto de la multa;

VI.- Por haber realizado el pago de la multa que se pretende conmutar;

VII.- Porque la autoridad recaudadora competente haya hecho efectivo el cobro de la multa, o haya trabado embargo o extraído bienes del infractor;

VIII.- Porque el solicitante no hubiere garantizado las obligaciones derivadas del cumplimiento del proyecto de inversión; y

IX.- Porque el solicitante sea considerado reincidente por la Procuraduría o los ayuntamientos, según corresponda.

ARTÍCULO 215.- La resolución que otorgue la conmutación de la multa contendrá las condicionantes que la Procuraduría o los ayuntamientos consideren necesarias, mismas que el infractor deberá cumplir en la forma y plazos establecidos en ella.

ARTÍCULO 216.- Una vez que las acciones autorizadas en el proyecto de inversión hayan sido ejecutadas en tiempo y forma, el titular de la Procuraduría o, en su caso, la autoridad correspondiente de los ayuntamientos determinará la conclusión del asunto y con ello el cierre del expediente administrativo abierto con motivo de la solicitud presentada, y ordenará la devolución del documento entregado por el infractor para garantizar sus obligaciones.

En caso de incumplimiento de las condicionantes impuestas al infractor en la resolución, el titular de la Procuraduría o, en su caso, la autoridad correspondiente de los ayuntamientos, dictará un acuerdo que deje sin efectos la resolución que otorgó la conmutación de multa y se ordenará hacer efectiva la garantía exhibida por el infractor.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 3 de enero de 1991, y sus reformas, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal proveerá lo necesario a efecto de que se instale el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable previsto en esta ley, dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor de este ordenamiento.

ARTÍCULO CUARTO.- Las personas físicas o morales que se encuentren realizando obras o actividades al amparo de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad ambiental federal cuya competencia para otorgarlos se haya transferido al Estado por virtud de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996, tendrán un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, para regularizar dichas licencias, permisos, autorizaciones o concesiones ante la Comisión o los ayuntamientos respectivos, en los términos dispuestos en este ordenamiento.

ARTÍCULO QUINTO.- Las solicitudes de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones presentadas ante la Comisión o los ayuntamientos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán, a elección de los interesados, seguir su trámite y resolverse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su presentación, o bien, mediante la Licencia Ambiental Integral prevista en esta ley, en cuyo caso, deberán cumplir con los requisitos que para ello se establece.

ARTÍCULO SEXTO.- Los procedimientos de inspección y los recursos de inconformidad, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso del Estado de Sonora deberá, en un plazo no mayor a 6 meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley, realizar las adecuaciones al Código Penal para el Estado de Sonora en materia de delitos contra la ecología.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de la Entidad deberán emitir en un plazo no mayor a un año los Reglamentos y demás disposiciones de observancia general a que se refiere esta Ley, hasta en tanto, se aplicarán en lo conducente, los Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

T R A N S I T O R I O D E L D E C R E T O 1 5 5

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 1 8 4

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ayuntamientos tendrán un plazo de 120 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto, para emitir el procedimiento de solicitud y los requisitos que mitiguen el impacto a los recursos naturales y a propiedades colindantes, para la obtención de la licencia de quema controlada.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 1 2 9

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 1 5 2

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El sistema de indicadores deberá definirse y publicarse en un plazo máximo de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 2 2 3

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 2 2 5

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los doce meses contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 2 2 7

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las solicitudes de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones presentadas ante la Comisión o los ayuntamientos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto podrán, a elección de los interesados, seguir su trámite y resolverse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su presentación, o bien, apegarse a las reformas que se efectuaron mediante el presente Decreto al procedimiento relativo a la Licencia Ambiental Integral.

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos administrativos derivados de la inspección y vigilancia, así como los recursos en contra de ellos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán su proceso y se resolverán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento del acto de inspección o vigilancia.

ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo Estatal deberá expedir en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los Reglamentos y demás disposiciones de observancia general a que hace referencia esta ley que se encuentren pendientes de emitir.

El Reglamento del Fondo Ambiental Estatal y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora en materia de Licencia Ambiental Integral se consideran prioritarios, por lo que deberán emitirse dentro de los noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 268

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 45 días naturales, posteriores al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 260

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

A P E N D I C E

Ley 171; B. O. No. 25 sección VIII, de fecha 25 de septiembre de 2008.

Decreto 136; B. O. No. 37, sección II, de fecha 7 de noviembre de 2011, que reforma los artículos 6º, párrafos primero y segundo, 29, párrafo primero, 36, párrafo primero, 39, párrafo primero, 51, párrafos primero y segundo, 63, párrafo primero, 66, 73, 75, párrafo primero, 104, párrafo primero, 119, fracción I, incisos f) y g), 172, párrafo primero, 178, 188, párrafo primero, 190, párrafo primero y la fracción I, 191, fracción II, 192, 193, párrafo primero, 195, 196, párrafo primero, 197, párrafo segundo, 198, 199, 201, 204, 205, párrafo primero, 207, párrafos primero y segundo y 209; se derogan los incisos h) e i) de la fracción I del artículo 119 y se adicionan las fracciones XLIII BIS al artículo 3º, I BIS al artículo 119 y III BIS al artículo 185.

Decreto 155; B. O. No. 47, sección III, de fecha 11 de diciembre de 2014, que reforma el primer párrafo del artículo 103 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

Decreto 184; B. O. No. 5, sección I, de fecha 16 de julio de 2015, que adiciona una Sección IV al Capítulo I del Título V y los artículos 126 BIS y 126 TER a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

Decreto 129; B. O. No. 38, sección III, de fecha 11 de mayo de 2017, que reforman los artículos 2º, fracción V, 3º, fracciones LII y LIII, 11, fracción XII, 25, fracciones III, V, VI y VII; y

se adicionan las fracciones LIV a la LIX al artículo 3°, una fracción I Bis al artículo 8, un párrafo segundo al artículo 22 y una fracción VIII al artículo 25.

Decreto 152; B. O. No. 51, sección I, de fecha 26 de junio de 2017, que adiciona una sección IX al Capítulo II del Título Segundo y un artículo 45 BIS.

Decreto 223; B. O. No. 46, sección II, de fecha 07 de junio de 2018, que reforman las fracciones XVII y XVIII y se adiciona una fracción XIX al artículo 144.

Decreto 225; B. O. No. 51, sección I, de fecha 25 de junio de 2018, que adicionan los artículos 143 BIS, 143 BIS 1, 143 BIS 2, 143 BIS 3, 143 BIS 4 y 143 BIS 5.

Decreto 227; B. O. No. 4, sección I, de fecha 12 de julio de 2018, que reforman los artículos 22, fracción VI, 23, fracciones IV y V, 25, fracciones VII y VIII, 27, fracción I, incisos c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l), y fracción II, incisos c) y d), 28, segundo párrafo, 30, 36, 38, segundo párrafo, 39, primer párrafo, 43, segundo párrafo, 44, segundo párrafo, 82, 86, 87, 88, 97, primer párrafo y fracciones I, II y III, inciso f), 98, 106, segundo párrafo, 114, fracción I, 144, fracción XIV, 152, fracción VIII, 153, fracciones II, X y XI, 157, primer párrafo, la denominación de la Sección IV del Capítulo IV del Título Quinto, los artículos 162, 191, fracciones V y VI, la denominación del Título Octavo, 194, 195, 196, 197, fracción I y párrafo tercero y 198, primer párrafo; asimismo, se adicionan la fracción XIX Bis al artículo 3°, un tercer párrafo al artículo 5°, la fracción VI al artículo 23, la fracción IX al artículo 25, el inciso m) a la fracción I del artículo 27, el artículo 30 Bis, un tercer párrafo al artículo 84, la Sección I del Capítulo I del Título Cuarto, los artículos 85-A y 85-B, 97 Bis, 103 Bis, los párrafos cuarto y quinto al artículo 116, la fracción XIV Bis al artículo 144, la fracción XII al artículo 153, los artículos 156 Bis, 171 Bis, 175, Bis, la fracción VI al artículo 191, los artículos 194-A, 194-B, 194-C, 194-D, 194-E, 194-F, 194-G, 194-H, 194-I, 194-J, 194-K, el Capítulo I Bis al Título Octavo con los artículos 194-L, 194-M, 194-N, 194-O, 194-P, 194-Q, 194-R, 194-S, 194-T, 194-U, 194-V y 194-W, los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 197, los párrafos segundo y tercero al artículo 206 y los actuales párrafos segundo y tercero pasan a ser cuarto y quinto, el Capítulo VI al Título Octavo y los artículos 212, 213, 214, 215 y 216 y se derogan los artículos 89 y 90.

Decreto 268; B. O. No. 26, sección VI, de fecha 27 de septiembre de 2018, que reforman las fracciones XXIV y XXV del artículo 7°, y la fracción VIII del artículo 136; y se adicionan una fracción XXVI al artículo 7°, una fracción I TER al artículo 8°, las fracciones X y XI al artículo 136 y un párrafo sexto al artículo 196.

Decreto 260; B. O. No. 26, sección VIII, de fecha 27 de septiembre de 2018, que reforman los artículos 7°, fracción III, 8°, fracción III, 30-BIS, párrafo primero, 85-A, párrafo primero, 97, 118, párrafos primero y sexto, 119, fracción I, incisos a), b), c), d), e), f) y g) y fracción II, inciso a), 120, párrafo primero, 121, párrafo primero, 123, párrafo primero, 124, párrafo segundo, 171 Bis, 190, párrafo primero y fracción V, 191, fracción VI, 194-A, párrafo primero, 194-B, párrafo segundo, 194-E, 194-F, párrafos cuarto y quinto, 194-G y la denominación del Título Octavo; asimismo, se derogan los incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) de la fracción II del artículo 119 y se adicionan una fracción XXI BIS al artículo 8°, un párrafo cuarto al artículo 85-A, los incisos h), i), j), k), l) y m) a la fracción I del artículo 119, una fracción VI al artículo 190 y un artículo 190-BIS

INDICE

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA	15
TÍTULO PRIMERO	15
DISPOSICIONES GENERALES	15
CAPÍTULO I	15
NORMAS PRELIMINARES	15
CAPÍTULO II	21
DE LAS COMPETENCIAS Y DE LA COORDINACIÓN	21
TÍTULO SEGUNDO	24

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	24
CAPÍTULO I	25
DE LA FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	25
CAPÍTULO II	26
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	26
SECCIÓN I	26
DE LA PLANEACIÓN ECOLÓGICA	26
SECCION II	26
DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO	26
SECCIÓN III	29
DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	29
SECCION IV	30
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS	30
SECCIÓN V	31
DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL	31
SECCIÓN VI	33
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	33
SECCIÓN VII	34
DE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA	34
SECCIÓN VIII	36
AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES	36
SECCIÓN IX	37
DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	37
TÍTULO TERCERO	38
DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	38
CAPÍTULO I	38
DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	38
SECCIÓN I	38
DISPOSICIONES GENERALES	38
SECCION II	39
DE LAS DECLARATORIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	39
SECCIÓN III	43
DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	43
CAPÍTULO II	46
DE LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN	46
TÍTULO CUARTO	47
DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL	47
CAPÍTULO I	47
OBJETO Y PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL	47
SECCIÓN I	48
PUBLICIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y CONSULTA PÚBLICA	48
CAPÍTULO II	50
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL	50
CAPÍTULO III	51
DE LA RESOLUCIÓN	51
CAPÍTULO IV	54
DE LOS SEGUROS Y LAS GARANTÍAS	54
TÍTULO QUINTO	55
DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	55
CAPÍTULO I	55
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA	55
SECCIÓN I	55
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	

DE LA ATMÓSFERA.....	55
SECCIÓN II	56
DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADA POR FUENTES FIJAS.....	56
SECCIÓN III	58
DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.....	58
SECCIÓN IV	61
DE LA QUEMA AGRÍCOLA	61
CAPÍTULO II	62
DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.....	62
CAPÍTULO III	64
DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.....	64
CAPÍTULO IV	67
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS	67
SECCIÓN I	67
DE LAS ATRIBUCIONES.....	67
SECCIÓN II	70
DE LOS CRITERIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	70
SECCIÓN III	71
DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, Y DE SU MANEJO INTEGRAL.....	71
SECCIÓN IV	73
INGRESO Y SALIDA DEL ESTADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	73
CAPÍTULO V	74
ACTIVIDADES RIESGOSAS	74
CAPÍTULO VI	75
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y DE LA GENERADA POR RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, ENERGÍA LUMÍNICA Y OLORES.....	75
CAPÍTULO VII	76
REGULACIÓN DE LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MINERALES O SUSTANCIAS NO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN.....	76
CAPÍTULO VIII	77
DE LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.....	77
CAPÍTULO IX	77
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS ECOLÓGICAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES	77
TÍTULO SEXTO	78
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.....	78
CAPÍTULO I	78
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE ECOLOGÍA	78
CAPÍTULO II	79
DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	79
CAPÍTULO III	80
DEL FONDO AMBIENTAL ESTATAL	80
TÍTULO SÉPTIMO	81
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA	81
CAPÍTULO ÚNICO	81
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA	81
TÍTULO OCTAVO	81
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y DE LAS SANCIONES	81

CAPÍTULO I	81
DISPOSICIONES GENERALES	81
CAPÍTULO I BIS	84
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.....	84
CAPÍTULO II	87
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	87
CAPÍTULO III	87
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.....	87
CAPÍTULO IV	90
DEL RECURSO DE REVISIÓN	90
CAPÍTULO V	90
DE LA DENUNCIA POPULAR.....	90
CAPÍTULO VI	92
DE LAS OPCIONES DE PAGO	92
TRANSITORIOS	94
A P E N D I C E	96